

PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

2024

Índice de contenido

INTRODUCCIÓN	3
CONCEPTO DE FRAUDE, CORRUPCIÓN, CONFLICTO DE INTERESES, RIESGO Y BANDERA ROJA 4	
Fraude	4
Corrupción.....	5
Conflicto de intereses.....	5
Riesgo	6
Bandera roja	7
FASES DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES 7	
Prevención.....	7
Fraude y corrupción	10
Conflictos de intereses	11
Evaluación del riesgo (ex ante)	12
Detección: Evaluación de riesgo (ex post)	13
Corrección y denuncia.....	14
Persecución y seguimiento	18
ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE POLÍTICA ANTIFRAUDE	20
ANEXO II.I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)	22
ANEXO II.II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y GASTOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).....	24
ANEXO III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.....	26
ANEXO IV. CATÁLOGO DE RIESGOS Y BANDERAS	28
ANEXO V. DIRECTRICES SOBRE REGALOS A INCLUIR EN EL PLAN ÉTICO Y DE CONDUCTA DE INCLIVA (APARTADO 15.4)	66
ANEXO VI. MATRIZ DE RIESGOS DE FRAUDE	68

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Medidas Antifraude del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA (en adelante, INCLIVA) se elabora en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.1 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que obliga a los Estados miembros, en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo, a adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Asimismo, el artículo 6.1 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer, en el plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la Orden, de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Además la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, obliga a todo el sector público, fundaciones como INCLIVA incluidas, a poner en marcha canales confidenciales para denunciar conductas fraudulentas.

El objetivo del presente documento es dar cumplimiento a la normativa citada en los párrafos anteriores estableciendo una serie de medidas antifraude que permitan supervisar los procedimientos desarrollados por este Organismo e identificar los potenciales riesgos, implantando una serie de procedimientos y herramientas a emplear para su detección y corrección, y estableciendo los canales de comunicación existentes para notificar posibles sospechas de fraude, contemplando las medidas correspondientes a las cuatro fases habituales en esta materia: a) Prevención; b) Detección; c) Corrección; y d) Persecución.

El presente Plan complementa el Código de Conducta y Canal de Denuncias de INCLIVA aprobado por la Junta de patronos el 19 de diciembre de 2022.

CONCEPTO DE FRAUDE, CORRUPCIÓN, CONFLICTO DE INTERESES, RIESGO Y BANDERA ROJA

Conforme al artículo 6.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE).

De acuerdo con ello, a continuación, se extractan las definiciones contenidas en las normas citadas.

Fraude

Se considerará fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión lo siguiente:

a) en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, cualquier acción u omisión relativa a:

- el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,
- el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto, o
- el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial;

b) en materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se cometan con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, causando una pérdida para los intereses financieros de la Unión, se reproducen las acciones u omisiones anteriores.

Adicionalmente, la Directiva (UE) 2017/1371 indica que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión constituye una infracción penal cuando se cometan intencionadamente, concretando un régimen sancionador en el artículo 7 de la citada Directiva. En cumplimiento de tal previsión, esta Directiva ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la correspondiente tipificación en el Código Penal.

Se ha de destacar que la existencia de una irregularidad no siempre implica la posible existencia de fraude; la concurrencia de intencionalidad es un elemento esencial en el fraude, elemento que no es preciso que se dé para que exista irregularidad.

El artículo 1.2 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, establece que “constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido”.

Corrupción

Se entenderá por corrupción pasiva la acción de un funcionario que, directamente o a través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.

Se entenderá por corrupción activa la acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.

Conflicto de intereses

Conforme al Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, existirá conflicto de intereses “cuando los agentes financieros y demás personas que participan en la ejecución del presupuesto tanto de forma directa, indirecta y compartida, así como en la gestión, incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el control, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal”.

Dicho concepto:

Es aplicable a todas las partidas administrativas y operativas en todas las Instituciones de la UE y todos los métodos de gestión.

Cubre cualquier tipo de interés personal, directo o indirecto.

Ante cualquier situación que se «perciba» como un potencial conflicto de intereses se debe actuar.

Las autoridades nacionales, de cualquier nivel, deben evitar y/o gestionar los potenciales conflictos de intereses.

Pueden estar implicados en el conflicto de intereses:

- a) Los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es.
- b) Aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.

Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse entre:

Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de un empleado público o beneficiario son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusión en dichos aspectos).

Conflicto de intereses potencial: surge cuando un empleado público o beneficiario tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.

Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un empleado público o en el que el empleado público tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. En el caso de un beneficiario implicaría un conflicto entre las obligaciones contraídas al solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que pueden influir de manera indebida en el desempeño de las citadas obligaciones.

Riesgo

A efectos de cumplimentación de la matriz se entiende por riesgo aquel evento u acción que, en caso de ocurrir, puede afectar negativamente y de forma significativa a:

- La capacidad y eficacia de los instrumentos de gestión.
- La selección y ejecución de las operaciones.
- La certificación de las operaciones o de sus proyectos
- La reputación de los agentes intervinientes.
- La mitigación de la potencial ocurrencia de irregularidades o fraude.

Ejemplos de riesgos asociados a los tres métodos de gestión son la limitación de la concurrencia y los conflictos de interés.

Bandera roja

A cada riesgo expuesto le han sido asociados una o varias banderas rojas.

Por bandera roja se entiende aquel hecho que revela información cualitativa o cuantitativa formada por uno o varios datos basados en hechos, opiniones o medidas, que permiten supervisar el nivel del riesgo identificado y el funcionamiento de los controles.

Son “indicadores” o señales de alarma de la posibilidad de que pueda existir el riesgo.

Un ejemplo de bandera roja asociada al riesgo “Limitación de la concurrencia” es que el organismo no ha dado la suficiente difusión a las Bases Reguladoras/Convocatoria.

FASES DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES

El proceso, como se ha advertido con anterioridad, consta de cuatro fases o etapas: prevención, detección, corrección y persecución, entendiendo que esta última fase se inicia con la denuncia ante la sospecha de un caso de fraude.

El Plan de medidas antifraude, por lo tanto, se articulará en torno la adopción fórmulas y políticas que respondan al propósito de luchar contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en cada una de las fases.

Prevención

Dentro del ciclo antifraude, la prevención es una etapa crucial en la lucha contra el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación. Es fundamental que las medidas preventivas adoptadas sean proactivas y proporcionales al nivel de probabilidad e impacto de los riesgos que se pretende mitigar o evitar, teniendo en cuenta la relación coste/eficacia. Las medidas preventivas pueden ayudar a reducir el riesgo de fraude, corrupción, conflictos de interés y doble financiación durante la fase de implementación, y también pueden disminuir el coste de los controles e investigaciones posteriores, además de tener un efecto disuasorio, ya que los posibles infractores pueden temer las consecuencias de sus acciones.

Estas medidas son comunes a todos los instrumentos de gestión y se encuentran dirigidas a reducir los riesgos residuales de fraude a un nivel aceptable y acorde a la legislación vigente. En este apartado consideramos medidas dirigidas de forma transversal a varios departamentos/unidades. Las medidas concretas por ámbito de actuación departamental se encuentran disponibles en el Anexo IV.

1) Comunicación Institucional

Con el objetivo de desincentivar cualquier tipo de actividad fraudulenta, la Secretaría y Gerencia de la Fundación emitirá una comunicación de haber actualizado y publicado el Plan Antifraude, expresando así su rechazo a la corrupción y al fraude en el ejercicio de cualquiera de las funciones que pueda realizar el personal empleado o de dirección de INCLIVA.

Reafirmar estos compromisos en materia de respeto a las normas legales, éticas y morales busca que su actividad sea percibida por todos los actores con los que interactúa la institución como contraria al fraude y la corrupción en todas sus formas. Todos los integrantes de las unidades adoptan y comparten este compromiso destinado a disuadir cualquier actividad fraudulenta, facilite su prevención y detección, y promueva el desarrollo de procedimientos efectivos para gestionar estos casos.

2) Código Ético y de Buena Conducta

Este Código Ético o de Buena Conducta, es de obligado cumplimiento para el personal que participe en la ejecución de las actividades desarrolladas por la Fundación, se encuentren, o no, financiadas por fondos europeos, PRTR, nacionales o autonómicos. En este documento se establecen los valores y principios que han de presidir la actuación de las personas para asegurar que se lleva a cabo conforme a unas pautas éticas y de integridad que garanticen asimismo la buena gestión financiera de la institución.

3) Identificación de las unidades de la organización con funciones en materia antifraude.

Se han identificado y se han descrito en el presente Plan las unidades de la Fundación INCLIVA a las que se le asignan las funciones que se derivan de la elaboración, aplicación, seguimiento y control de las medidas contenidas en el Plan. Este punto se desarrolla en detalle en el Anexo IV, donde se recogen las medidas diferenciando unidades y departamentos concretos con actividad relacionada en lucha contra el fraude.

4) Gobernanza.

Considerando un sistema de buen gobierno y responsabilidad, en el marco del Código Ético y de Conducta de la Fundación, se crea la figura del “Órgano de Control”, con la función de evaluar la eficacia del sistema y procedimientos implantados de buen gobierno y responsabilidad, además de las funciones propias del Comité Antifraude vinculadas a la lucha contra el fraude en la gestión de fondos europeos. El Órgano de Control se conformará por el Responsable de Gerencia, el Responsable del Área Legal y el Responsable de la Dirección Científica de la Fundación.

5) Formación y concienciación al personal empleado

La formación del personal clave para la implantación de un adecuado marco de lucha contra el fraude en la Fundación INCLIVA y sus organismos autónomos vendrá impartida por personal jurídico conocedor de la materia.

Adicionalmente, INCLIVA podrá impulsar aquellas acciones de formación específicas para el personal que gestione, en cualquiera de sus fases, la ejecución del PRTR, con especial tratamiento de los conflictos de interés y actos que pueden constituir señales de advertencia de posible existencia de fraude.

6) Evaluación de riesgo de fraude.

El Comité Antifraude llevará a cabo una evaluación de los riesgos de fraude a los que se encuentra expuesta la institución en la gestión de fondos. Estas evaluaciones se llevarán a cabo con una periodicidad anual o cuando se produzcan circunstancias sobrevenidas que requieran una evaluación en base a las mismas. A tal efecto, se considerarán circunstancias sobrevenidas: posibles cambios significativos en la estructura organizativa y los procesos de gestión de la organización, cambios regulatorios, e incidentes relacionados con eventuales incumplimientos o irregularidades.

El Comité Antifraude establecerá un sistema de control interno de gestión para mitigar los riesgos de fraude identificados en el ejercicio de evaluación de riesgos, y garantizar la consecución de los objetivos de los fondos.

7) Análisis de terceras partes en relaciones contractuales

El Comité Antifraude llevará a cabo procedimientos de análisis de las terceras partes con las que vaya a establecer relaciones contractuales, así como a los terceros susceptibles de recibir fondos. Estos procedimientos tendrán como objetivo una gestión responsable y un análisis y control riguroso de las entidades, en términos de riesgos de reputación e integridad, con los que la institución puede vincularse y/o que vayan a recibir fondos.

8) Doble financiación

El Órgano de Control establecerá las medidas necesarias para asegurar que no se produzca doble financiación en la ejecución de los fondos recibidos. Entre otras medidas, la institución llevará a cabo las siguientes actuaciones:

- Solicitar declaraciones responsables a los investigadores beneficiarios de ayudas en virtud de las cuales asuman que para el mismo gasto no perciben financiación pública de otra fuente y declaración responsable de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR
- Mantener un registro detallado con las fuentes de financiación de los diferentes proyectos, subproyectos y líneas de acción en el sistema de gestión y seguimiento del PRTR.
- Identificar a los investigadores beneficiarios de ayudas y sus fuentes de financiación. En particular, se debe identificar a los perceptores finales de los fondos, los contratistas y subcontratistas, así como los titulares reales en el caso de que los perceptores finales y los contratistas o subcontratistas sean personas jurídicas.

Para realizar comprobaciones de doble financiación, las Unidades relacionadas con el cumplimiento antifraude y el propio Comité Antifraude podrán realizar consultas a bases de datos externas como la Base de Datos Nacional de Subvenciones o Arachne.

Fraude y corrupción

La prevención del fraude se articula en torno a las siguientes posibles medidas y actividades que pondrá en marcha INCLIVA y sus Órganos de Gobierno responsables de Gobierno responsables, y que deberán estar dirigidas a reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable:

Elaboración de una declaración voluntaria institucional con relación a la adopción de medidas antifraude.

En el **Anexo I** de este documento se presenta un modelo de declaración institucional.

El establecimiento de un código de conducta ante el fraude. INCLIVA cuenta con un Código Ético que recoge el modelo de código de conducta y principios éticos con los que deben regirse los empleados de INCLIVA y el personal adscrito.

Establecimiento de mecanismos adecuados de evaluación de riesgo para todos los instrumentos de gestión (Evaluación ex ante) en la que identificarán los riesgos singulares para cada uno de estos y las formas de manifestación (Banderas Rojas), con el propósito de implantar controles preventivos que minimicen la ocurrencia de riesgo de fraude.

Participación de todo el personal en reuniones, grupos de trabajo, sesiones formativas en relación con la prevención y detección del fraude. Estos serán organizados por los Órganos de Gobierno responsables de INCLIVA o por terceros. Se centrarán en la identificación y evaluación de riesgos, establecimiento de controles específicos, actuación en caso de detección de fraude, casos prácticos de referencia, etc.

Elaboración de un plan de actuaciones contra el fraude que transmita dentro y fuera de la organización la postura oficial de ésta con respecto al fraude y la corrupción.

Los Órganos de Gobierno responsables de INCLIVA deberán informar a los destinatarios, potenciales destinatarios y a cualquier persona interesada con las actividades que ejecuta de la necesidad de comunicar las sospechas de fraude o irregularidades detectadas a la dirección de correo electrónico que se habilite al efecto.

Sistema de control interno eficaz, adecuadamente diseñado y gestionado, con controles que se centren en paliar con eficacia los riesgos que se identifiquen.

Análisis de datos. Dentro de los límites relativos a la protección de datos, cruce de datos con otros organismos públicos o privados del sector que permitan detectar posibles situaciones de alto riesgo.

Aplicar las herramientas de prevención y detección del fraude eficaces que permitan identificar los riesgos de fraude y adoptar las medidas correctoras necesarias.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en su Comunicación de 1/2017 de 6 de abril, Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, sugiere que todos los órganos y entidades encargados de la tramitación y gestión de las diferentes ayudas incluyan, tanto en las convocatorias de ayudas susceptibles de ser financiadas con fondos de la Unión Europea como en procedimientos de contratación, una referencia en los términos siguientes:

“Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web <http://igaepre.central.sepg.minhac.aga/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx>, y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio.”

Conflictos de intereses

Las posibles medidas y actividades a aplicar por INCLIVA para prevenir los conflictos de intereses son:

- Comunicación e información al personal de la entidad sobre las distintas modalidades de conflicto de interés y de las formas de evitarlo.
- Cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) a los intervinientes en los procedimientos de licitación desde el responsable del órgano de contratación, el personal que redacte los documentos de licitación y bases, los evaluadores y los propios licitadores.
En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al inicio de la correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejándose en el Acta.
Se adjunta el modelo de DACI en el Anexo II del presente documento.
- Comprobación de información, cuando sea posible, a través de bases de datos de los registros mercantiles, bases de datos de organismos nacionales y de la UE, expedientes de los empleados (teniendo en cuenta las normas de protección de datos) o a través de la utilización de herramientas de prospección de datos («data mining») o de puntuación de riesgos (ARACHNE).
- Aplicación estricta de la normativa interna, estatal y autonómica correspondiente, en particular, el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativo

a los principios éticos, el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la abstención y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En caso de detectarse un conflicto de intereses, se podrán adoptar las siguientes medidas para atajarlo:

- Comunicación de la situación que pudiera suponer la existencia de un conflicto de interés al superior jerárquico, que confirmará por escrito si considera que existe tal conflicto. Cuando se considere que existe un conflicto de intereses, se velará por que la persona de que se trate cese toda actividad en ese asunto, pudiendo adoptar cualquier otra medida adicional de conformidad con el Derecho aplicable.
- Aplicación estricta de la normativa interna, estatal y autonómica correspondiente, en particular, del 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la Recusación y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Evaluación del riesgo (ex ante)

Con el propósito de establecer un mecanismo adecuado para anticipar el riesgo potencial de fraude, además del uso de bases de datos como la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BDNS), herramientas de prospección de datos («*data mining*») o de puntuación de riesgos (ARACHNE), siempre que sea posible, es preciso realizar una Evaluación ex ante que permita identificar los riesgos por instrumento de gestión y sus indicadores de fraude (banderas rojas) para articular un sistema de controles específicos que prevengan las posibles ocurrencias de fraude, corrupción o conflicto de interés.

La Evaluación ex ante se configura como una herramienta de evaluación de riesgo continua en la medida en que el capítulo de riesgos y su manifestación efectiva (banderas rojas) se retroalimenta de lo que sucede en la fase de detección durante la evaluación ex post. Así, por ejemplo, si un riesgo se hace visible a través de sus banderas rojas, habrá que analizar si esta manifestación es puntual u obedece a una incidencia sistémica porque el control implantado no funciona. En este caso, se precisará diseñar un nuevo control que mitigue la ocurrencia del riesgo.

La utilización de herramientas informáticas automatizadas para mejorar las prácticas de evaluación de riesgos resulta un elemento fundamental, a través de consultas de comprobación cruzada a diferentes bases de datos, tomando en consideración variables como referencias de contratos, beneficiarios finales, contratistas y subcontratistas, relaciones con ministerios alienados en razón de la materia tratada por la institución, consorcios de investigación, etc:

- Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): Contiene información sobre subvenciones o ayudas con referencia a las bases reguladoras de la subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas, así como la identificación de las personas o entidades incurso en determinadas prohibiciones para recibir subvenciones. <https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias>

- Plataforma de Contratación del Sector Público: Plataforma electrónica que permite la difusión de los perfiles del contratante de los órganos de contratación del sector público. <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma>
- Fundanet y otras aplicaciones de gestión integral con las que trabaja la institución.
- MINERVA, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, para la realización de un análisis ex ante de riesgo de conflicto de interés, basado en *data mining*.

Este trabajo de análisis se realizará en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden HFP/55/2023, que se dicta en aplicación de la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Al mismo tiempo, se realizarán las comprobaciones pertinentes de que la entidad se encuentra dada de alta en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) y se solicitará la documentación previa que permita a la institución verificar que una entidad externa se encuentra al tanto del cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales con la Seguridad Social u otra entidad de la administración pública.

Detección: Evaluación de riesgo (ex post)

La detección se efectuará a través de una evaluación de riesgo ex post (evaluación ex post) que medirá si los controles implantados, con carácter preventivo, sobre los instrumentos de gestión en la evaluación de riesgo ex ante han resultado en la práctica eficaces.

Hay que indicar que la materialización del riesgo tendrá consecuencias que afectarán, de manera solidaria, a todas las partes que participan en la ejecución del PRTR.

Si bien, en el Anexo IV, se facilitarán con más detalle los efectos de la manifestación de las banderas rojas cuando se realice la evaluación ex post, podemos señalar con carácter general los siguientes:

Para los perceptores finales de los fondos:

1. Reintegro de las cantidades irregulares
2. Indemnización por daños y perjuicios
3. Denuncia ante los organismos pertinentes para que adopten las medidas sancionadoras que consideren oportunas.

INCLIVA como órgano gestor:

1. Retirada de las actividades afectadas por las irregularidades
2. Determinación de si la materialización se debe a un error puntual o a un error sistémico de los procedimientos. En cuyo caso, se revisarán los mismos y se establecerán nuevos controles preventivos.
3. Modificación del plan de medidas antifraude para su doble validación por parte del órgano responsable de la medida y del órgano responsable del componente.
4. Puesta en conocimiento de la Autoridad Responsable del PRTR y de la Autoridad de Control de las modificaciones realizadas a los procedimientos.

Para el órgano responsable de la medida:

1. Auditoría, en el marco de la medida, del conjunto de las actuaciones ejecutadas por el órgano gestor afectado por las irregularidades.
2. Revisión de sus procedimientos y establecimiento de nuevos controles cuando fueren necesarios.
3. Modificación del plan de medidas antifraude para su validación por parte del órgano responsable del componente.

En el **Anexo III** se describe el procedimiento de evaluación del riesgo ex ante y ex post.

En el **Anexo IV** se establece un catálogo de riesgos, banderas rojas y controles potenciales para mitigar el riesgo de fraude en los instrumentos de gestión que resultan de aplicación a este Organismo de conformidad con las acciones a ejecutar en el marco del PRTR:

- 1.- Contratos públicos.
- 2.- Convocatorias de recursos humanos.

Así mismo, el **Anexo IV** contempla un catálogo de acciones posibles en el supuesto de la bandera roja se materialice a pesar de tener los controles implantados.

Por otro lado, si el conflicto de interés es de naturaleza penal, la autoridad competente deberá, además de las medidas especificadas anteriormente, y de acuerdo con la legislación vigente:

- Informar a la Fiscalía para que incoe un procedimiento penal.
- Supervisar los aspectos administrativos del caso.
- Correlacionar sus conclusiones con otros datos y utilizar la información para llevar a cabo un análisis de riesgos interno.

Corrección y denuncia

Estas medidas son comunes a todos los instrumentos de gestión.

Todas las irregularidades detectadas, tanto las que se consideran fraude como las que no, serán corregidas por INCLIVA. La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la inmediata suspensión del procedimiento, la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones y la revisión de todos aquellos proyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al mismo.

Comunicación de casos sospechosos de fraude. En la página web de INCLIVA, se habilitará el canal de denuncias para comunicar todos los casos sospechosos de fraude. Aquella persona que detecte el posible caso de fraude deberá escalar inmediatamente sus sospechas utilizando el Canal de Denuncias. Será importante que el denunciante aporte toda la información y evidencias de las que disponga, con el objetivo de facilitar el posterior análisis del caso por parte de los organismos pertinentes.

Toda sospecha de fraude se instruirá según el procedimiento establecido en el Código de Conducta (<https://www.incliva.es/wp-content/uploads/2022/12/2022-Codigo-Etico-INCLIVA.pdf>) y Canal de Denuncias (<https://www.incliva.es/canal-de-denuncias/>).

El Comité Antifraude u Órgano de Control será el responsable de investigar todas las sospechas de fraude recibidas a través del Canal de Denuncias, salvo en el caso de que la denuncia se dirija contra él, en cuyo caso será tramitada por la persona o personas que designe el Patronato al efecto.

Dicha investigación tendrá como fin último reunir información suficiente sobre el potencial caso de fraude, así como cuantificar sus consecuencias, y en ella, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

1. Identificación de las áreas afectadas por el posible caso de fraude.
2. Evaluar la incidencia de riesgo de fraude y su calificación como sistémico o puntual.
3. Retirar las actuaciones o la parte de las mismas afectadas por la sospecha de fraude y financiadas o a financiar por el MRR, tal como se ha significado en fase de detección.
4. Revisar y modificar, en su caso, el Plan de medidas antifraude, también tal y como se ha indicado en la fase de detección.

En el caso de que la denuncia llegue directamente a la dirección de INCLIVA, se podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara su seguimiento, se tramitará siguiendo el procedimiento establecido en el Código de Conducta y Canal de Denuncias de INCLIVA y se podrá comunicar en su caso, a la Autoridad financiadora los hechos producidos y las medidas adoptadas a los Órganos de Gobierno responsables y entidad financiadora.

❖ Suspensión de procedimientos sospechosos de fraude

Se deberá determinar el proceso concreto en el cual se ha detectado el potencial caso de fraude. En este punto podrá ser de ayuda la revisión de la información contenida en la aplicación puesta en marcha por la Unión Europea, para llevar a cabo un seguimiento de los fondos.

Asimismo, se deberá notificar tal circunstancia en el más breve plazo posible a las autoridades interesadas y a las unidades implicadas en la realización de las actuaciones, y revisar todos aquellos proyectos, subproyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al mismo, tarea que deberá ser realizada por el Comité Antifraude.

La Dirección será la encargada de suspender el proceso de forma inmediata, retirando los proyectos, o la parte de los proyectos afectados por el fraude financiado o a financiar por el MRR. A este respecto, y de manera general, en el caso de que el fraude o potencial caso de fraude se produjese en el proceso de contratación pública, la Dirección paralizará el proceso y procederá a su repetición, y, si se produjese en el proceso de subvenciones, la Dirección paralizará el pago de fondos a las personas físicas o jurídicas vinculadas directamente con el fraude.

❖ Notificación de denuncia por fraude (presunto o confirmado)

Será deber del Comité Antifraude la comunicación de cualquier caso potencial o confirmado de fraude a la Dirección de la institución, en calidad de órgano responsable de la Entidad Ejecutora,

quién se lo comunicará al Ministerio competente, en calidad de Entidad Decisora, quien, a su vez, se lo notificará a la Secretaría General de Fondos Europeos.

Asimismo, la comunicación se podrá llevar a cabo a través de los canales facilitados por la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), a través de internet o por correo postal. La OLAF analizará la denuncia y determinará si se debe abrir una investigación al respecto, para lo cual podrá solicitar información adicional al denunciante del caso. Una vez concluida la investigación, la Oficina emitirá recomendaciones sobre las medidas que deberán llevar a cabo las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos nacionales implicados.

En los casos oportunos, comunicación de los hechos producidos a la fiscalía y a los tribunales competentes. Se procederá a denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades Públicas competentes (Fiscalía, Fiscalía Europea, Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, Juzgados de lo Penal, Policía...) y a la Autoridad Responsable del PRTR para su valoración y eventual comunicación a la OLAF de la Comisión Europea.

❖ Evaluación de las consecuencias del fraude

A este respecto, una vez se detecte el posible fraude, y se adopten las medidas correctoras pertinentes, que han sido definidas en el apartado anterior, se deberá realizar un análisis del caso tratando de evaluar aspectos como la incidencia o el impacto producido por el fraude.

Para ello, se deberá revisar el ciclo completo por el cual se ha ido moviendo esa parte de los fondos, determinando todos los organismos afectados y las acciones realizadas en este entorno. La aplicación de seguimiento de los recursos financieros de la Unión Europea permite la revisión de todo este ciclo, por lo que se puede utilizar para la realización de este análisis.

Además, se analizará la calificación del fraude, determinando si éste es sistemático o puntual. Se considerará *fraude sistemático* cuando se encuentren evidencias de que el fraude ha podido ser realizado de manera recurrente y con procedimientos similares, mientras que se considerará *fraude puntual* cuando se observe que se trata de un hecho aislado, que no se ha repetido en otras ocasiones.

❖ Especial mención en caso de conflicto de intereses

El artículo 6.5.i) de la Orden HFP/1030/2021, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE, determina que es necesario definir un procedimiento relativo a la corrección de situaciones de conflictos de interés:

- Cuando un empleado de la FB tuviera conocimiento de la posible existencia de un conflicto de interés, se lo comunicará a su superior jerárquico.
- El superior jerárquico de la persona que pudiera estar implicada en dicho conflicto debe analizar la situación y confirmar por escrito si considera que existe tal conflicto.
- Este escrito de confirmación deberá remitírsele al responsable de área del que dependa y, este, a su vez, a la subdirección correspondiente, quien se lo remitirá a la Dirección, quien deberá determinar que la persona de que se trate cese su actividad en el asunto correspondiente.

- Además del cese en la participación en el asunto en el que pueda haber conflicto de interés, se podrá adoptar cualquier otra medida adicional de conformidad con el Derecho aplicable.

Igualmente, se prevé la aplicación estricta de la normativa correspondiente, en particular, el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, e Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la Recusación, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Por último, es preciso reseñar que la FB cuenta con una serie de reglas de actuación que si bien, en la actualidad, únicamente afectan a los Patronos, se pretenden adaptar con el fin de que puedan ser extensibles a cualquier empleado de la FB:

- Independencia. Actuar en todo momento con profesionalidad, con lealtad a la FB Biodiversidad e independientemente de intereses propios o de terceros. En consecuencia, se abstendrán en todo caso de primar sus propios intereses a expensas de los de la FB Biodiversidad.
- Abstención. Abstenerse de intervenir o influir en la toma de decisiones que puedan afectar a la FB Biodiversidad con las que exista conflicto de interés, de participar de las reuniones en que dichas decisiones se planteen y de acceder a información confidencial que afecte a dicho conflicto.
- Comunicación al Patronato, a través de su Presidencia o Secretaría, de cualquier situación de conflicto de interés en que se encuentre incurso. En la comunicación, el patrono deberá indicar:
 - Si el conflicto de interés le afecta personalmente o a través de una persona a él vinculada, identificándola en su caso.
 - La situación que da lugar al conflicto de interés, detallando en su caso el objeto y las principales condiciones de la operación o decisión proyectada.
 - El importe o evaluación económica aproximada.

❖ Especial mención a la Fiscalía Europea

Con carácter previo a describir la información a remitir al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en relación con los procedimientos judiciales o administrativos de carácter sancionador que afecten a gastos financiados con fondos europeos, conviene delimitar las funciones y el ámbito de actuación de la Fiscalía Europea.

La Fiscalía Europea, regulada en el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, entró en funcionamiento efectivo con fecha de 1 de junio de 2021, de conformidad con Decisión de ejecución (UE) 2021/856 de la Comisión, de 25 de mayo de 2021, por la que se determina la fecha en la que la Fiscalía Europea asume sus funciones de investigación y ejercicio de la acción penal.

De conformidad con lo anterior aquellas entidades que participen en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que en el ejercicio de sus funciones tengan

conocimiento de un hecho presuntamente delictivo cuya competencia pueda corresponder a la Fiscalía Europea, después de haber realizado las verificaciones oportunas, deberán comunicarlo a la citada institución mediante la utilización de los modelos o cualquier otra forma que arbitre por la Fiscalía Europea.

Persecución y seguimiento

En el caso de proporcionar una pista de auditoría, para todas las acciones que realice tras detectar un posible fraude, INCLIVA utilizará las herramientas comunes que se implementen por las Autoridades Responsables para denuncia de irregularidades.

Las principales medidas que deberá llevar a cabo el Comité Antifraude de INCLIVA cuando tenga constancia de una sospecha fundamentada de fraude:

1. Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la Autoridad Responsable de los fondos (Secretaría General de Fondos Europeos), la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara a su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control (IGAE).
2. Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las autoridades públicas competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude) y para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
3. Iniciar un procedimiento de información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario. Cuando INCLIVA reciba una denuncia/notificación sobre un potencial fraude o irregularidad producida en la gestión de fondos, evaluará la denuncia y analizará la razonabilidad de llevar a cabo o no una investigación. El objetivo de la investigación será resolver las sospechas de fraude desde su origen hasta su esclarecimiento.

En el caso de que se constate la materialización de un fraude en la gestión de los fondos, INCLIVA podrá tomar las siguientes medidas sancionadoras:

- En el caso de que el fraude hubiera sido realizado por personal laboral, se aplicarán sanciones disciplinarias en cumplimiento del Convenio Colectivo de las Fundaciones de Investigación Biomédica de la Comunitat Valenciana y del resto de la normativa aplicable.
 - En el caso de que el fraude hubiera sido realizado por personas o entidades distintas a las incluidas en el párrafo anterior (entre otros, beneficiarios privados, contratistas o subcontratistas) se aplicarán las medidas disciplinarias o contractuales que considere proporcionales a los daños ocasionados. Todo ello, tomando en consideración las normativas y regulaciones aplicables, en particular: (i) la Ley General de Subvenciones; y (ii) la Ley de Contratos del Sector Público.
4. Denunciar los hechos ante el Ministerio Fiscal y los tribunales competentes, en los casos oportunos, además de la puesta en conocimiento por los cauces adecuados de la Fiscalía Europea.

En lo que respecta a la evaluación que realizará anualmente el Comité de Riesgos de Fraude, se revisarán de manera objetiva y crítica las denuncias de fraude, identificando si son riesgos de

carácter puntual o sistémico, reflejándolo en la Matriz de Riesgos, para garantizar un adecuado seguimiento. Igualmente, se desarrollarán medidas de mejora para mitigar y prevenir los riesgos identificados, que se reflejarán en la Matriz de Riesgos según las directrices del Anexo VI.

Todas las acciones realizadas por los Órganos de Gobierno responsables tras detectar un posible indicio de fraude, quedarán documentadas. Esto permitirá que pueda realizarse un seguimiento de todos los casos sospechosos de fraude.

En la revisión anual de su plan de medidas antifraude, INCLIVA incorporará un documento de estado de situación del plan que detalle los casos sospechosos de fraude identificados, la certificación de que los controles sobre las banderas rojas han funcionado o, en su caso, la relación de nuevos controles implantados o la modificación de los que no resultaron eficaces.

ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE POLÍTICA ANTIFRAUDE

INCLIVA es perceptora de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (en adelante, PRTR).

El artículo 22.1 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establece que:

“Al ejecutar el Mecanismo, los Estados miembros, en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo, adoptarán todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. A tal efecto, los Estados miembros establecerán un sistema de control interno eficaz y eficiente y recuperarán los importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto. Los Estados miembros podrán recurrir a sus sistemas nacionales habituales de gestión presupuestaria.”

Por ello, INCLIVA, como entidad incluida en el sector público de la Generalitat Valenciana, a través de esta declaración institucional, quiere manifestar su compromiso para mantener un alto nivel de calidad jurídica, ética y moral y adoptar los principios de integridad, imparcialidad y honestidad, y es su intención demostrar su oposición al fraude y a la corrupción en el ejercicio de sus funciones.

El personal de INCLIVA y el personal adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria, como empleados públicos que son, tienen, entre otros deberes, el de “*velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres*” (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).

INCLIVA persigue con esta política consolidar una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta y que haga posible su prevención y detección, y desarrollar unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo, y que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el momento preciso.

INCLIVA, siguiendo su Código Ético, desarrolla su política de prevención y detección del fraude con el uso de procedimientos adecuados y recursos propios para evaluación de riesgos, revisión y actualización periódica de la política antifraude, así como el seguimiento de los resultados. También cuenta con la colaboración de diferentes responsables y gestores de procesos, internos y externos, para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.

Además, dispone también de un sistema que registra y almacena la información precisa de cada operación y los proyectos que cada una de ellas incluye para garantizar la fiabilidad y regularidad en relación con el gasto, y su correcta trazabilidad.

INCLIVA implementa medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida en períodos anteriores y en la evaluación inicial del riesgo de fraude. Está a su vez incorporando procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse a través de los canales de notificación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan esta materia.

En definitiva, INCLIVA tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción que ejerce mediante un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.

Vicente de Juan Martin

Director Gerente

Andres Cervantes Ruipérez

Director Científico

ANEXO II.I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

Expediente:

Contrato

Subvención.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, **en el marco del “Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea .Next Generation EU** declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

- a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
- b. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- c. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

- d. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
- e. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

ANEXO II.II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES Y GASTOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)

Expediente:

Contrato:

Subvención:

Don/Doña, con DNI, como
..... de la entidad
....., con NIF, y domicilio fiscal en
.....
..... en la condición de beneficiaria de ayudas
financiadas con recursos provenientes del PRTR para el encargo/proyecto
....., y que participa como (*seleccione uno*):

- ☐ Personal de Gestión Económica contratado en la entidad indicada,
- ☐ Investigador Principal colaborador con la Fundación INCLIVA,
- ☐ Personal contratado/subcontratado de una entidad externa,

DECLARA

Primero.- Que, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX “.....”, manifiesta el compromiso personal que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las políticas internas de la Fundación INCLIVA, así como las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Segundo.- Que, adicionalmente y atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés “*do no significant harm*”) y a hacer un gasto responsable de los recursos económicos asignados imputándose, de forma total o parcial, a los proyectos y financiadores del proyecto indicado, sin superar en ningún caso el 100% de su importe en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan,

manifestando, además, que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano responsable, sin dilación, cualquier situación contraria a la buena consecución de este documento.

Cuarto. Que conoce que una declaración responsable que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.

Así lo declaro en, en fecha

(Insertar firma, nombre completo y DNI)

ANEXO III. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de riesgo de fraude correrá a cargo de INCLIVA, como entidad ejecutora.

Se realiza en dos fases:

La evaluación de riesgo ex ante:

INCLIVA identificará los instrumentos de gestión que utiliza para la ejecución de sus proyectos subvencionados en el marco del PRTR, catalogará los riesgos asociados a aquellos, definirá los indicadores a través de los cuales se podría manifestar el riesgo de fraude (banderas rojas) y establecerá controles que mitiguen el riesgo para cada una de las banderas rojas.

La periodicidad será anual.

Ahora bien, INCLIVA procederá a revisar su evaluación ex ante cada vez que se materialice una bandera, se determine que la incidencia es sistémica y que el control definido para mitigar el riesgo asociado a la bandera roja no es eficaz.

En el Anexo IV se han definido un catálogo de riesgos junto a sus banderas rojas y controles. Así mismo se han configurado unos listados de comprobación por instrumento de gestión que, en sí mismos, constituyen la evaluación ex ante. La evaluación ex ante se considera completada cuando todas las banderas rojas asociadas a los riesgos por instrumento de gestión cuentan con un procedimiento de control preventivo que mitiga el riesgo hasta considerarlo como residual.

La evaluación ex ante realizada por el órgano responsable de la actuación INCLIVA, será revisada por el auditor interno y en su caso la Secretaria General.

La evaluación de riesgo ex post:

INCLIVA llevará a cabo dicha evaluación cada vez se complete una justificación de subvención. Esto no obsta para que se realicen evaluaciones intermedias durante la vida del proyecto para verificar que los controles definidos en la evaluación ex ante funcionan y que el riesgo de fraude se mantiene en residual.

INCLIVA señalará, en su evaluación ex post, si se ha materializado o no una de las banderas asociadas. En el supuesto de que la materialización se haya producido, se analizará si la incidencia es puntual o sistémica. Si es puntual, se corregirán las consecuencias para el caso concreto. Pero si es sistémica, además de corregir las consecuencias, se deberá revisar su evaluación ex ante e introducir nuevos controles o modificar los existentes.

El plazo para que esto se realice será de 15 días. La Unidad responsable de la actuación supervisará los cambios en un máximo de 10 días y el órgano responsable de la evaluación (auditor interno / Secretaria General / Calidad) los validará en 5 días.

INCLIVA retirará del sistema informático aquellas actuaciones o las actividades afectadas por la materialización del riesgo de fraude. Así mismo, no podrá subir ninguna actuación a la herramienta informática asociada al instrumento de gestión con riesgo, en tanto en cuanto no se haya realizado una nueva evaluación ex ante y haya sido validada por el órgano responsable de la medida y en última instancia por el órgano responsable del Componente.

En el Anexo IV se ha definido un catálogo de acciones que emprender en caso de que materialice una bandera roja. Así mismo se han configurado unos listados de comprobación orientativos por instrumento de gestión que, en sí mismos, constituyen la evaluación ex post.

ANEXO IV. CATÁLOGO DE RIESGOS Y BANDERAS

INSTRUMENTO DE GESTIÓN: CONTRATOS PÚBLICOS

❖ DURANTE LA FASE DE PREPARACIÓN

CONJUNTO DE RIESGOS 1. MANIPULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A EFECTOS DE LIMITAR LA CONCURRENCIA

El procedimiento de preparación y/o adjudicación ha sido manipulado de tal forma que no se garantiza el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad de todos los posibles contratistas, estableciéndose alguna práctica restrictiva de la competencia.

1.1. Los pliegos de cláusulas de prescripciones técnicas y/o administrativas se han redactado a favor de un licitador:

Definición:

Esta situación se puede materializar, por ejemplo, en el caso en el que objeto del contrato haga referencia a marcas comerciales concretas y no se incorporen posibles marcas alternativas, se describa de forma que solo pueda licitar un número muy reducido de licitadores o se limite la participación por factores como número de empleados, volumen de facturación o estados financieros, sin que en ningún caso resulte imprescindible para la buena ejecución del contrato. Este hecho limita la concurrencia y dificulta que el procedimiento resulte competitivo.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Revisión por parte del servicio jurídico o persona independiente al órgano de contratación de la documentación inicial de cualquier procedimiento de contratación que garantice un procedimiento abierto y competitivo, así como la participación de diversos licitadores.
- Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
- Firma por parte de los empleados que participan en la redacción de los pliegos o de las memorias justificativas o equivalente de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

Debe realizarse una revisión del expediente y de los gastos asociados al contrato para determinar si debe retirarse o si, por el contrario, cabría algún tipo de subsanación.

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

1.2. Los pliegos presentan prescripciones más restrictivas que las aprobadas en procedimientos previos similares:

Definición:

La materialización de esa situación se produce en el caso en el que se endurecen los requisitos, restringiendo la concurrencia, en un procedimiento de carácter similar a procedimientos anteriores. Ejemplo: elevar los requisitos financieros, establecer un determinado volumen de facturación exigido, reducir la franja de número de empleados, etc. con respecto a lo establecido en procedimientos de similares características.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Revisión por parte del servicio jurídico o persona independiente al órgano de contratación de la documentación inicial de cualquier procedimiento de contratación que garantice la no manipulación del procedimiento y el establecimiento en los pliegos de prescripciones justas y proporcionadas para la correcta ejecución del objeto del contrato.
- Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
- Firma por parte de los empleados que participan en la redacción de los pliegos o de las memorias justificativas o equivalente de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

1.3. Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación según el tipo de procedimiento de contratación:

Definición:

Se produce en los casos en que el procedimiento de contratación requiere, según la normativa aplicable al sector público, la solicitud de ofertas a un número mínimo de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, y este extremo se incumple.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Revisión por parte del servicio jurídico o persona independiente al órgano de contratación de la documentación inicial de cualquier procedimiento de contratación que garantice la no manipulación del procedimiento y el cumplimiento del número mínimo de ofertas presentadas.

- Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
- Firma por parte de los empleados que participan en la redacción de los pliegos o de las memorias justificativas o equivalente de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

Retirada del expediente.

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

1.4. Posible fraccionamiento del contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización del procedimiento que hubiese correspondido según la cuantía total, procedimiento que requiere mayores garantías de concurrencia y de publicidad:

Definición:

Esta situación se produce cuando:

- Se fracciona el contrato en dos contratos menores con objeto similar a idéntico adjudicatario o se fracciona el contrato en diferentes suministros asociados al mismo objeto.
- Se realizan contratos secuenciales con idéntico adjudicatario evitando la utilización del procedimiento que hubiese correspondido según la cuantía total, procedimiento que requiere mayores garantías de concurrencia y de publicidad.
- Se llevan a cabo compras secuenciales por medio de adjudicaciones directas en cortos plazos de tiempo.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Realización de controles periódicos del importe acumulado por proveedor y correlativo análisis de los objetos de los distintos contratos celebrados con un mismo proveedor.
- Aplicar controles sobre la presencia continuada en las ofertas de circunstancias improbables (como por ejemplo, evaluadores de las ofertas que parecen conocer perfectamente el mercado) o de relaciones inusuales entre terceros (como por ejemplo, identificación de patrones de turnos entre adjudicatarios).

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

- Retirada de los expedientes.
- La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

- Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

1.5. El procedimiento de contratación se declara desierto y vuelve a convocarse a pesar de que se recibieron ofertas admisibles de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos:

Definición:

Se declara desierto un procedimiento, a pesar de que existen ofertas que cumplen los criterios para ser admitidas en el procedimiento, y se vuelve a convocar restringiendo los requisitos a efectos de beneficiar a un licitador en concreto.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Apertura pública de las ofertas presentadas, y levantamiento de acta recogiendo la información de las ofertas recibidas y valoradas.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

- La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a una causa objetiva. En el primero de los supuestos, se retirará el expediente.
- Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

1.6. Ausencia de medidas de información y publicidad en la documentación relativa al procedimiento de contratación y/o insuficiencia de plazos para la recepción de ofertas:

Definición:

Se produce cuando el procedimiento no cumple con los requisitos de información y publicidad mínimos requeridos para el anuncio de la convocatoria en la normativa aplicable, requisitos que tienen como finalidad asegurar la transparencia y el acceso público a la información. En este sentido, se produce una falta de transparencia o publicidad cuando en los pliegos no se determinan con exactitud los plazos para la presentación de proposiciones, o se fijan unos plazos excesivamente reducidos que puedan conllevar la limitación de la concurrencia. Por ejemplo, los pliegos no establecen de forma exacta qué documentos concretos debe presentar el licitador en su proposición para que esta sea admitida en el procedimiento.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Establecer procedimientos de comprobación de cumplimiento de los requisitos de información y publicidad. Se recomienda la utilización de una lista de comprobación (checklist).

- Establecer medidas de información al personal involucrado en la gestión de actividades cofinanciadas sobre las obligaciones de obligado cumplimiento en materia de información y publicidad. Se recomienda la elaboración y distribución entre todo el personal involucrado de un breve manual sobre la materia.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

- Debe realizarse una revisión del expediente para determinar si debe retirarse o si, por el contrario, cabría algún tipo de subsanación.
- Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

1.7 Falta de verificación de la solvencia económica, técnica, financiera y del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

Definición:

En este caso nos referimos a la situación en la que, durante el proceso de contratación pública, no se comprueban adecuadamente los antecedentes y la capacidad de los proveedores o contratistas. Esto puede incluir no verificar si tienen la capacidad financiera, técnica y organizativa para cumplir con el contrato, o si están al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. La falta de estas verificaciones puede resultar en la contratación de entidades no calificadas o en situaciones de fraude y corrupción.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Exigir a los licitadores la presentación de documentos acreditativos como balances financieros, estados de resultados, declaraciones de impuestos, certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria.
- Realizar una evaluación detallada de la solvencia económica y técnica basada en los documentos presentados y en una investigación adicional si es necesario. Esto incluye verificar el historial de proyectos similares completados, la capacidad técnica y el personal cualificado disponible.
- Utilizar herramientas y bases de datos oficiales para la verificación de la información presentada, como registros de morosos, bases de datos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria.

Acciones a realizar en caso de materialización del riesgo (ex post):

- Suspender inmediatamente el proceso de contratación o ejecución del contrato si se detecta una falta de verificación adecuada o un incumplimiento por parte del contratista.
- Realizar una revisión exhaustiva del contrato y de los antecedentes del contratista para evaluar el alcance del problema y los posibles daños.
- Informar de manera transparente a todas las partes interesadas sobre la situación, las acciones tomadas y las medidas preventivas que se implementarán para evitar futuras incidencias.

1.8 Reclamaciones de otros ofertantes:

Definición:

Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a la limitación de la concurrencia en el procedimiento de contratación

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Revisión e informe por parte del servicio jurídico o persona independiente de la documentación inicial de cualquier procedimiento de contratación.
- Registro e informe de las quejas o reclamaciones recibidas por parte de otros ofertantes y análisis de las mismas.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a causas objetivas. En el primero de los supuestos, se retirará el expediente.

CONJUNTO DE RIESGOS 2. PRÁCTICAS COLUSORIAS EN LAS OFERTAS

Se producen acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas o prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre los licitadores que por su objeto o, por su naturaleza, pueden producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el procedimiento de licitación.

Las prácticas colusorias pueden tener como objetivo la fijación de precios, con el fin de alcanzar un precio superior al que se derivaría de una licitación competitiva o el reparto del mercado mediante el acuerdo entre empresas licitadoras para repartir mercados geográficos o clientes.

2.1. Posibles acuerdos entre los licitadores en complicidad con empresas interrelacionadas y/o vinculadas o mediante la introducción de "proveedores fantasma":

Definición:

Este tipo de prácticas colusorias se producen cuando, con el objeto de conseguir la adjudicación de un contrato, los licitadores manipulan el procedimiento de contratación mediante acuerdos colusorios con otros ofertantes que presentan o no vinculación empresarial o mediante la simulación de falsos licitadores. Por ejemplo, se presentan diversas ofertas por parte de diferentes entidades que presentan vinculación empresarial o se presentan ofertas fantasma que no proporcionan la calidad suficiente y existe la duda de que su finalidad sea la obtención del contrato.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Establecer un sistema de control tanto de los pliegos como de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control. Se recomienda elaborar un acta de la mesa de contratación, la realización de un análisis de las ofertas, de la publicación y de los pliegos, entre otros documentos.
- Comprobar la no existencia de vinculación empresarial entre las empresas licitadoras.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

2.2. Posibles acuerdos entre los licitadores en los precios ofertados en el procedimiento de contratación:

Definición:

Los licitadores llegan a acuerdos para no ofrecer por debajo de un precio, con patrones de ofertas inusuales o similares: las ofertas tienen porcentajes exactos de rebaja, la oferta ganadora está muy próximo al umbral de precios establecidos en los pliegos, los precios son muy similares, etc.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Establecer un sistema de control tanto de los pliegos como de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control que permita comprobar la no existencia de acuerdos entre los licitadores en relación a los precios ofertados. Se recomienda elaborar un acta de la mesa de contratación, la realización de un análisis de las ofertas, de la publicación y de los pliegos, entre otros documentos.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

2.3. Posibles acuerdos entre los licitadores para el reparto del mercado:

Definición:

Los licitadores se reparten el mercado reduciendo la competencia, por ejemplo, por región, tipo de trabajo, tipo de obra...

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Establecer un sistema de control tanto de los pliegos como de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control que permita comprobar la no existencia de acuerdos entre los licitadores para el reparto del mercado. Se recomienda elaborar un acta de la mesa de contratación, la realización de un análisis de las ofertas, de la publicación y de los pliegos, entre otros documentos.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

- La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.
- Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

2.4. El adjudicatario subcontrata a otros licitadores que han participado en el procedimiento de contratación:

Definición:

Un licitador que no ha resultado adjudicatario ejecuta la parte principal del contrato siendo subcontratado por el adjudicatario, esquivando los límites de subcontratación establecidos, considerando además que el citado licitador no cumplía previamente la solvencia técnica y/o administrativa requerida.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Establecer un sistema de control tanto de los pliegos como de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control que permita comprobar que no se produzca la subcontratación de licitadores que no hayan resultado adjudicatarios en el procedimiento de contratación. Se recomienda elaborar un acta de la mesa de contratación, la realización de un análisis de las ofertas, de la publicación y de los pliegos, entre otros documentos.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

- La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a causas objetivas. En el primero de los supuestos, se retirará el expediente.
- Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

❖ DURANTE LA FASE DE ADJUDICACIÓN

CONJUNTO DE RIESGOS 3. CONFLICTO DE INTERÉS

Existe conflicto de intereses cuando en la adopción de decisiones confluyen el interés general o el interés público e intereses privados propios o compartidos con terceras personas o de familiares directos de alguno de los miembros del órgano de contratación o de empleados del órgano contratante.

3.1. Comportamiento inusual por parte de un empleado que insiste en obtener información sobre el procedimiento de licitación sin estar a cargo del procedimiento:

Definición:

Cuando un empleado que no forma parte de los equipos encargados del procedimiento de licitación se interesa fuertemente por conseguir información que puede alterar el devenir del concurso o favorecer a algún contratista en particular. Puede darse el caso en que tenga también vinculación con proveedores de algún potencial contratista.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Verificar que en el procedimiento se realiza un examen de los antecedentes de los potenciales proveedores terceros.
- Establecer procedimientos que limiten la información sobre el procedimiento de contratación para los agentes externos/ajenos al mismo (barreras o “murallas chinas”).
- Firma por parte de los empleados que participan en la tramitación del expediente de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. La entidad deberá poner en conocimiento de los hechos a la unidad competente y tramitar siguiendo el Canal de Denuncias de INCLIVA, un procedimiento de información reservada y, en su caso, incoar expediente disciplinario y/o comunicarlo a la entidad de adscripción.

3.2. Un miembro del órgano de contratación que haya trabajado para una empresa participa en el concurso de forma inmediatamente anterior a su incorporación al puesto de trabajo en el organismo adjudicador:

Definición:

Cuando un miembro del órgano de contratación ha trabajado para una empresa que puede presentarse a un procedimiento de contratación de manera inmediatamente anterior, pueden surgir conflictos de interés o manipulaciones dentro del procedimiento a favor o en contra de dicha empresa potencial de ser el contratista ganador.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Verificar el establecimiento en los procedimientos el examen de los antecedentes de los potenciales proveedores terceros.
- Establecer una declaración de independencia para las personas que participen en el procedimiento de contratación.
- Firma por parte de los miembros del órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, la entidad deberá reemplazar de inmediato y con carácter preventivo a los miembros del órgano de contratación que presenten un conflicto de interés aparente. Se retomará el proceso de licitación en la fase en que deba ser retomado una vez solventado el incidente.

3.3. Vinculación familiar entre un empleado del órgano de contratación y una persona con capacidad de decisión o con influencia en la empresa licitadora:

Definición:

Esta vinculación juega a favor de la adjudicación del contrato objeto de valoración.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Establecer una declaración de independencia para las personas que participen en el procedimiento de contratación.
- Verificar el establecimiento en los procedimientos el examen de los antecedentes de los potenciales proveedores terceros.
- Firma por parte de los miembros que participan en el órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, la entidad deberá reemplazar de inmediato y con carácter preventivo a los miembros del órgano de contratación que presenten un conflicto de interés aparente. Se retomará el proceso de licitación en la fase en que deba ser retomado una vez solventado el incidente.

3.4 Reiteración de adjudicaciones a favor de un mismo licitador:

Definición:

El licitador obtiene los contratos gracias al favoritismo que recibe de manera injustificada por parte del organismo contratante, sin estar basada en los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.
- Aplicar el Código Ético de INCLIVA a las personas intervinientes en la gestión del procedimiento de contratación.
- Establecer un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados.
- Establecer una declaración de independencia para las personas que participen en el procedimiento de contratación.
- Firma por parte de los miembros que participan en el órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a una causa objetiva. En el primero de los supuestos, se retirarán los expedientes afectados.

3.5. Aceptación continuada de ofertas con precios elevados y/o trabajo de calidad insuficiente:

Definición:

Se adjudican de manera continuada los contratos a licitadores cuyas ofertas económicas son elevadas con respecto al resto de las ofertas presentadas y/o con contraprestaciones que no se ajusta a la calidad demandada en los pliegos de prescripciones técnicas; o bien la oferta ganadora es demasiado alta en comparación con el resto de licitadores. Estas adjudicaciones pueden verse sujetas a casos de conflictos de interés por parte de algún miembro del organismo contratante, como es el caso de un licitador que conoce de antemano que va a resultar adjudicatario y ofrece un precio alto dentro del límite establecido en el procedimiento de contratación.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.

- Aplicar el Código Ético de INCLIVA a las personas intervinientes en la gestión. Establecer un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados, así como sobre los productos derivados de los mismos.
- Firma por parte de los miembros que participan en el comité de evaluación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a una causa objetiva. En el primero de los supuestos, se retirarán los expedientes afectados.

3.6. Los miembros del órgano de contratación no cumplen con los procedimientos establecidos en el código de ética de INCLIVA:

Definición:

El órgano dispone de un código de ética cuyos procedimientos no son seguidos por los miembros del órgano de contratación (comunicación de posibles conflictos de interés, etc).

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.
- Aplicar el Código Ético de INCLIVA a las personas intervinientes en la gestión. Establecer un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados.
- Firma por parte de los miembros que intervienen en el órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, la entidad deberá reemplazar de inmediato y con carácter preventivo a los miembros del órgano de contratación que están obviando el Código de Ética durante el proceso de licitación. Se comenzará, de nuevo, el procedimiento con rigurosa obediencia al código de ética.

En paralelo, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá poner en conocimiento de los hechos a la unidad competente para abrir un procedimiento de información reservada y, en su caso, incoar expediente disciplinario.

3.7. Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones:

Definición:

Cuando sin causa justificada y razonable, el empleado encargado de la contratación declina un ascenso a una posición en la que deja de tener relación con adquisiciones. Esto puede deberse a que guarde algún tipo de vinculación u obtenga algún tipo de beneficio no declarado con algún potencial adjudicatario.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.
- Aplicar el Código Ético de INCLIVA a las personas intervinientes en la gestión. Establecer un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados.
- Firma por parte de los miembros que intervienen en el órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a otra causa no vinculada a la intención de defraudar.

3.8. Indicios de que un miembro del órgano de contratación pudiera estar recibiendo contraprestaciones indebidas a cambio de favores relacionados con el procedimiento de contratación:

Definición:

Cuando en breve espacio de tiempo y sin aparente razón justificada, un miembro del órgano encargado de la contratación tiene un aumento súbito de la riqueza o nivel de vida relacionado con actos a favor de determinados adjudicatarios.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.
- Aplicar el Código Ético de INCLIVA a las personas intervinientes en la gestión. Establecer un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados.
- Firma por parte de los miembros del órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, la entidad deberá reemplazar de inmediato y con carácter preventivo a los miembros del órgano de contratación que están influyendo deliberadamente en la selección. Se comenzará, de nuevo, el procedimiento de selección de proyectos.

En paralelo, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá poner en conocimiento de los hechos a la unidad competente para abrir un procedimiento de información reservada y, en su caso, incoar expediente disciplinario.

3.9. Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o productos:

Definición:

Se aprecia una socialización o estrecha relación entre un empleado de contratación y un proveedor de servicios o productos que puede tener intereses empresariales resultantes de los procedimientos de contratación.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Disponer de sistemas que garanticen un cierto grado de aleatoriedad y heterogeneidad en la selección de los miembros de los comités de evaluación.
- Aplicar el Código Ético de INCLIVA a las personas intervinientes en la gestión. Establecer un control de calidad aleatorio sobre los procedimientos de contratación realizados.
- Firma por parte de los miembros del órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, la entidad deberá reemplazar de inmediato y con carácter preventivo a los miembros del órgano de contratación que presentan un conflicto de interés aparente.

En paralelo, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá investigar si ese conflicto de interés aparente es un conflicto de interés real, en cuyo caso debe poner en conocimiento de los hechos a la unidad competente para abrir un procedimiento de información reservada y, en su caso, incoar expediente disciplinario y/o comunicarlo a su entidad de adscripción.

3.10. Comportamientos inusuales por parte de los miembros del órgano de contratación:

Definición:

No se detalla en el expediente las razones sobre los retrasos o ausencia de documentos referentes a los contratos y el empleado se muestra reacio a justificar dichos casos. Esto puede ser debido a que exista algún tipo de conflicto de interés por parte de dicho empleado.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Aplicar el Código Ético de INCLIVA y sería recomendable incluir una declaración anual de Conflicto de intereses y su registro por parte de todo el personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
- Firma por parte de los miembros del órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI).
- Elaboración de un informe periódico sobre el estado en que se encuentra el procedimiento de contratación para dejar constancia de las incidencias ocurridas en el mismo (retrasos, situaciones inusuales, retiro de alguna oferta...) que permita hacer un seguimiento sobre el registro y disponibilidad documental de las ofertas en el seno de órgano adjudicador.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

La entidad deberá investigar si dichos comportamientos inusuales obedecen a un conflicto de interés y siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA y, en su caso incoar expediente disciplinario.

Todo ello con independencia de que se retiren los expedientes afectados.

CONJUNTO DE RIESGOS 4. MANIPULACIÓN EN LA VALORACIÓN TÉCNICA Y/O ECONÓMICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Se observan indicios de manipulación del procedimiento de contratación en favor de un licitante o en detrimento de uno o varios licitantes.

4.1. Los criterios de adjudicación no están suficientemente detallados o no se encuentran recogidos en los pliegos:

Definición:

En los pliegos no se incluyen o están redactados de forma ambigua y/o abierta los criterios de adjudicación para valorar las ofertas técnicas, en su caso, y económicas, para seleccionar a los licitadores que resulten adjudicatarios, lo que produce ausencia de transparencia y objetividad en la selección del adjudicatario.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Establecer un sistema de control previo sobre el contenido de los pliegos que garantice su correcta redacción y la inclusión detallada y clara de los criterios de valoración de las ofertas.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes. Si fuera así, se retirarán los expedientes afectados por esta bandera roja.

Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

4.2. Aceptación de baja temeraria sin haber sido justificada adecuadamente por el licitador:

Definición:

El adjudicatario ha presentado una oferta anormalmente baja, en comparación con las presentadas por el resto de los competidores y ha sido aceptada por el órgano de contratación sin justificación previa de la capacidad de llevar a cabo la prestación en tiempo y forma requeridos. También puede deberse a filtraciones de los precios ofertado por licitadores, ajustando su precio a las ofertas económicas filtradas.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Establecer un sistema de control sobre el contenido y de los pliegos y de la concordancia entre las ofertas presentadas y las condiciones establecidas en los mismos, dejando constancia por escrito de dicho control. Se recomienda elaborar un acta de la mesa de contratación, la realización de un análisis de los pliegos, análisis de las ofertas, publicación de la adjudicación).
- Establecer un control sobre la pertinencia de la justificación de la baja de precios temeraria. Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
- Firma por parte de los miembros del órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI).

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a causas objetivas. En el primero de los supuestos, se retirará el expediente.

Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

4.3. Ausencia y/o inadecuados procedimientos de control del procedimiento de contratación:

Definición:

No se llevan a cabo medidas de control para seguir el procedimiento de licitación de manera adecuada, dando lugar a posibles defectos en la selección de los candidatos. Por ejemplo, se produce la admisión de ofertas económicas sin haber descartado previamente a los licitadores que incumplen los requisitos técnicos y/o administrativos.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Apertura pública y/o electrónica de las ofertas presentadas, y levantamiento de acta recogiendo la información de las ofertas recibidas.
- Elaborar un checklist de verificación de cumplimiento de requisitos previos para la admisión de las ofertas previo a la valoración de las mismas.
- Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
- Firma por parte de los miembros del órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a causas objetivas. En el primero de los supuestos, se retirará el expediente. Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

4.4. Indicios de cambios en las ofertas después de su recepción:

Definición:

Se presentan indicios que sugieren que tras la recepción de las ofertas se ha producido una modificación en las mismas, bien en relación con el precio, bien en relación con otras condiciones recogidas en las mismas.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Apertura pública y/o electrónica de las ofertas presentadas, y levantamiento de acta recogiendo la información de las ofertas recibidas.

- Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
- Firma por parte de los miembros del órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI).
- Establecer un mecanismo de control para llevar a cabo un seguimiento de las ofertas presentadas hasta la adjudicación, de forma que se pueda garantizar que no se han producido modificaciones es las mismas para obtener ventaja en el procedimiento licitado

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a causas objetivas. En el primero de los supuestos, se retirará el expediente.

4.5. Ofertas excluidas por errores o por razones dudosas:

Definición:

Ofertas que quedan excluidas por razones insuficientemente justificadas o por errores.

Puede responder a intereses para la selección de un contratista en particular.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Apertura pública y/o electrónica de las ofertas presentadas, y levantamiento de acta recogiendo la información de las ofertas recibidas.
- Utilización de un procedimiento de verificación de cumplimiento de requisitos de valoración de ofertas. Se recomienda la elaboración de una lista de comprobación de requisitos (checklist).
- Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
- Firma por parte de los miembros del órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI).

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a causas objetivas. En

el primero de los supuestos, se retirará el expediente. Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

4.6. Quejas de los licitadores:

Definición:

Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a posibles manipulaciones de las ofertas presentadas.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Apertura pública y/o electrónica de las ofertas presentadas, y levantamiento de acta recogiendo la información de las ofertas recibidas.
- Disponer de una política en materia de conflicto de interés que incluya una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplique medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
- Firma por parte de los miembros del órgano de contratación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI).
- Registro e informe de las quejas o reclamaciones recibidas por parte de otros ofertantes y análisis de las mismas.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a causas objetivas. En el primero de los supuestos, se retirará el expediente.

❖ DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN

CONJUNTO DE RIESGOS 5. IRREGULARIDADES EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

5.1. El contrato formalizado altera los términos de la adjudicación:

Definición:

Los contratos deben formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación y en ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. Como ejemplos de alteraciones pueden citarse los siguientes: minoración de las cláusulas contractuales estándar y/o las establecidas en la adjudicación del contrato, cambios sustanciales en las

especificaciones técnicas o en el pliego de condiciones administrativas, diferencias entre los requisitos de calidad, cantidad o especificaciones de los bienes y servicios del contrato y los requisitos relativos a los mismos aspectos en los pliegos de la convocatoria, etc.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Establecer un control por parte del servicio jurídico del contrato con carácter previo a la firma del mismo, que permita verificar que no se ha producido una alteración en los términos de la adjudicación, dejando constancia de este control por escrito.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

Se retirará el expediente.

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

5.2. Falta de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato:

Definición:

Se produce una ausencia de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato en términos de denominación social, personalidad jurídica, etc. sin la debida justificación.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Establecer un control por parte del servicio jurídico del contrato con carácter previo a la firma del mismo, que permita verificar la coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato, dejando constancia de este control por escrito.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

Retirada del expediente.

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

5.3. Demoras injustificadas para firmar el contrato entre el organismo de contratación y el adjudicatario:

Definición:

Las demoras excesivas en la firma del contrato pueden sugerir que está sucediendo algo inusual o sospechoso.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Establecer un control por parte del servicio jurídico del contrato con carácter previo a la firma del mismo mediante la elaboración de un informe periódico (mensual) sobre el estado en que se encuentra el procedimiento de contratación para dejar constancia de las incidencias ocurridas en el mismo (retrasos, situaciones inusuales...), dejando constancia de este control por escrito.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

5.4. Inexistencia de contrato:

Definición:

No existe contrato de adjudicación o la documentación del expediente de contratación es insuficiente, incompleta o inexistente como, por ejemplo, de la documentación de los licitadores en el procedimiento.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Establecer un control por parte del servicio jurídico del contrato con carácter previo a la firma del mismo que permita hacer un seguimiento sobre el registro y la disponibilidad documental de las ofertas en el seno de órgano adjudicador, dejando constancia de este control por escrito.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

Retirada del expediente.

La materialización de esta bandera indica un riesgo elevado de fraude. A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

CONJUNTO DE RIESGOS 6. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O IRREGULARIDADES EN LA PRESTACIÓN QUE BENEFICIEN AL ADJUDICATARIO

6.1. Prestación en términos inferiores a lo estipulado en el contrato:

Definición:

Se produce cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: la falta de entrega o de sustitución de productos, la ejecución irregular en términos de calidad o de plazos de entrega o la asignación de recursos no cualificados o de coste inferior a las necesidades del contrato, entre otros; todo ello sin la correspondiente justificación/motivación, solicitud formal de prórroga por motivos no imputables al adjudicatario, por causas de fuerza mayor, etc.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Realización de controles periódicos/análisis de informes de ejecución/realización de verificaciones sobre el terreno, en su caso.
- En el caso de sustitución de productos, verificar que esta circunstancia estaba prevista en los pliegos, así como el establecimiento de la necesidad de un informe o memoria explicativa en la que se deje constancia de que los nuevos productos son de una calidad equivalente a los iniciales y cumplen con la misma finalidad que aquellos.
- Establecimiento de controles periódicos de la calidad de la prestación y establecimiento de cláusulas de penalización en los contratos para aquellas situaciones en las que se detecte que la calidad de la prestación no se ajusta con la oferta presentada.
- Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y las realmente efectuadas.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

Retirada del expediente.

La materialización de esta bandera indica un riesgo de fraude. A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

6.2. Falta de reciprocidad en las prestaciones recogidas en el contrato:

Definición:

Una de las características básicas de los contratos es que sean sinalagmáticos, es decir, debe existir una equivalencia entre la prestación y la contraprestación. Por ejemplo, se adjudica un contrato por 40.000 euros para un fin que no justifica tal cuantía (pintar unos despachos cuyo coste real de mercado puede suponer menos de 2.000 euros), se altera el servicio o producto a entregar por parte del contratista disminuyendo su cantidad pero sin producirse un cambio en la contraprestación o pago a realizar por parte del ente adjudicador, sobrestimación de la calidad o

de las actividades del personal, etc.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Realización de controles periódicos/análisis de informes de ejecución/realización de verificaciones sobre el terreno en su caso.
- Establecer controles periódicos de la calidad de la prestación y cláusulas de penalización en los contratos para aquellas situaciones en las que se detecte que la calidad de la prestación no se ajusta con la oferta presentada.
- Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y las realmente efectuadas.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

Retirada del expediente.

La materialización de esta bandera indica un riesgo de fraude. A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

6.3. Cambios en la prestación sin causa razonable aparente:

Definición:

Esta situación puede producirse de diferentes formas. Por ejemplo, tras establecer por contrato unos pedidos específicos con un contratista, estos se aumentan o disminuyen en numerosas ocasiones y sin causa razonable aparente, o se aumentan las horas de trabajo sin el aumento correspondiente de los materiales utilizados que se han podido utilizar durante esas horas de trabajo, etc.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Establecer controles aleatorios sobre la calidad del servicio prestado y sobre la pertinencia de la justificación de los cambios en la prestación.
- Revisión de los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y las realmente efectuadas.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o si la materialización de esta bandera obedece a causas objetivas. En el primero de los supuestos, se retirará el expediente.

CONJUNTO DE RIESGOS 7. FALSEDAD DOCUMENTAL

Se produce cuando el licitador ha incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 141 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, y/o se aprecia falsedad en la documentación presentada para obtener el reembolso de costes.

7.1. Documentación falsificada presentada por los licitadores en el proceso de selección de ofertas:

Definición:

El licitador presenta documentación e información falsa para poder acceder al procedimiento de contratación.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Elaboración por parte del organismo de un checklist de verificación de la documentación requerida para poder acceder al proceso de contratación.
- Establecer un control de la documentación presentada por parte de los licitadores a fin de detectar documentación o información falsificada.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

Retirada del expediente.

La materialización de esta bandera supone un elevado riesgo de fraude. A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

7.2. Manipulación de las reclamaciones de costes o de la facturación para incluir cargos incorrectos, falsos, excesivos o duplicados:

Definición:

Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso de costes por parte del contratista, como, por ejemplo, reclamaciones de costes duplicadas, facturas falsas o infladas, facturación de actividades que no se han realizado, o que no se han realizado de acuerdo con el contrato (costes incorrectos de mano de obra, cargos por horas extraordinarias no pagadas, tarifas horarias inadecuadas, gastos reclamados para personal inexistente, o gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución), sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal, etc.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Establecer un control de las facturas emitidas a fin de detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº de factura, etc.), o falsificaciones.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

Retirada del expediente.

La materialización de esta bandera indica un riesgo elevado de fraude. A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes.

Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

❖ DURANTE LA FASE DE CONTROL

CONJUNTO DE RIESGOS 8. PÉRDIDA DE PISTA DE AUDITORÍA

No se garantiza que toda la documentación relativa al procedimiento de contratación se conserva para disponer de una pista de auditoría adecuada.

8.1. La documentación que obra en el expediente de contratación es insuficiente de forma que se pueda garantizar la pista de auditoría:

Definición:

En el expediente de contratación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Ejemplos: la documentación de la pista de auditoría implica la disposición de procesos de gastos, procesos de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad, de ejecución, documentación y valoración de los licitadores, etc.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Establecer procedimientos de verificación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría. Se recomienda la utilización de una lista de comprobación (checklist).

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera indica un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes. En caso de lo fuera, se retirará el expediente.

Si se tratara de una irregularidad subsanable, se procederá a su subsanación.

Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

INSTRUMENTO DE GESTIÓN: CONTRATOS MENORES

CONJUNTO DE RIESGOS 9. USO INDEBIDO DE LOS CONTRATOS MENORES O DE PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD

Los contratos menores a menudo se adjudican sin necesidad de seguir un procedimiento de licitación pública, lo cual puede reducir la transparencia y competencia. Esto puede dar lugar a situaciones de favoritismo o nepotismo, donde las adjudicaciones se realicen en función de relaciones personales en lugar de méritos objetivos.

9.1. Abuso en el uso de contratos menores o procedimientos sin publicidad:

Definición:

El abuso en el uso indebido de contratos menores se refiere a la práctica de utilizar estos contratos de manera inadecuada o para eludir los procedimientos de contratación más estrictos y transparentes. Esto incluye acciones como el fraccionamiento de contratos para mantener los importes por debajo del umbral legal que exige una licitación abierta, la adjudicación directa sin competencia efectiva, o la repetición de contratos con los mismos proveedores para evitar procesos competitivos.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Exigir a las personas que participen en esta fase del procedimiento de contratación, la suscripción de una DACI, suscripción de una declaración de aceptación, cumplimiento y sometimiento al código ético de la entidad, decálogo de buenas prácticas en el ámbito contractual y/o plan de integridad de la entidad pública para lograr una contratación íntegra.
- Acudir excepcionalmente al contrato menor, motivando su utilización en los términos exigidos por la normativa contractual y reduciendo el umbral por el cual acudir a este tipo de tramitación.
- Establecer un adecuado registro, control y seguimiento de los contratos menores, mediante la implantación de una herramienta informática que registre correlativamente, todos los expedientes tramitados como tales. - Efectuar el seguimiento de la contratación menor a través de una base de datos en la que se registren todos los pagos efectuados por este procedimiento a lo largo del ejercicio.
- Revisar los gastos menores pagados durante los últimos años identificando las prestaciones contractuales que se repitieron durante esos ejercicios.
- Se podrá solicitar un certificado de que se han solicitado ofertas a un mínimo de tres operadores y que consta el certificado de las empresas que han presentado ofertas en plazo y forma.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

Se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y una auditoría forense para esclarecer los hechos y determinar el alcance del problema. En caso de confirmarse irregularidades, es necesario tomar medidas disciplinarias contra los responsables, que pueden incluir desde sanciones administrativas hasta acciones legales. Además, se debe implementar un proceso de revisión y ajuste de los procedimientos de contratación y los controles internos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Si se tratara de una irregularidad subsanable, se procederá a su subsanación.

CONJUNTO DE RIESGOS 10. IRREGULARIDADES EN LA DETERMINACIÓN DEL CONTRATO

10.1. Incumplimiento de la obligación de comunicar la relación anual de contratos menores al Registro Oficial de Contratos de la GVA o comunicación fuera de plazo

Definición: Este riesgo se refiere a la falta de registro o al registro tardío de los contratos menores adjudicados, lo cual puede resultar en una falta de transparencia y control, dificultando la supervisión adecuada de las actividades de contratación.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Para evitar este incumplimiento, es fundamental establecer un calendario claro y estricto para la presentación de la información anual sobre contratos menores, con plazos claramente definidos. Además, se debe asignar la responsabilidad de esta tarea a personal específico, que reciba capacitación continua sobre la normativa aplicable y el uso de los sistemas de registro. La implementación de sistemas automatizados de recordatorios y alertas puede también ayudar a asegurar que se cumplan los plazos.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): En caso de que se materialice el incumplimiento, es necesario llevar a cabo una auditoría interna para identificar las causas y responsables del fallo. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, podrían aplicarse sanciones administrativas o disciplinarias a los responsables. Además, se debe realizar una corrección inmediata de los registros y notificar a las autoridades correspondientes. Es crucial revisar y reforzar los procedimientos internos para asegurar que no vuelvan a ocurrir tales omisiones.

10.2. Ejecución de contratos menores sin la aprobación previa del gasto y sin la aprobación del órgano de contratación siendo aprobado con posterioridad a la ejecución

Definición: Este riesgo implica la formalización y ejecución de contratos menores sin obtener previamente la autorización necesaria, lo cual contraviene las normativas de contratación y puede llevar a una gestión ineficaz y a posibles responsabilidades legales.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Para prevenir este riesgo, es esencial establecer un sistema robusto de control interno que asegure que ninguna contratación se lleve a cabo sin la aprobación previa del gasto y del órgano correspondiente. Esto incluye la

implementación de procedimientos de revisión y aprobación que sean claros y accesibles para todos los empleados. Además, es importante realizar capacitaciones periódicas para el personal sobre los procedimientos de contratación y las consecuencias de incumplir estos protocolos.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): Si se detecta que un contrato menor ha sido ejecutado sin la debida aprobación, es imperativo realizar una investigación para determinar cómo y por qué ocurrió el incumplimiento. Los resultados de esta investigación deben conducir a la toma de medidas disciplinarias si se identifican responsabilidades individuales. También es fundamental ajustar los procedimientos y controles para prevenir futuros incidentes similares, así como comunicar claramente las consecuencias de tales acciones a todos los involucrados.

10.3. Ejecución de contratos menores sin la aprobación previa del gasto y sin la aprobación del órgano de contratación siendo aprobado con posterioridad a la ejecución

Definición: Este riesgo se refiere a la práctica de dividir artificialmente un contrato en varias partes más pequeñas para que cada una se trate como un contrato menor, evitando así procedimientos de contratación más competitivos y transparentes que serían obligatorios para un contrato de mayor valor.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Para prevenir el fraccionamiento irregular de contratos, es crucial establecer y comunicar claramente las políticas y normativas que prohíben esta práctica. Se debe incluir en los procedimientos de contratación la obligación de realizar una justificación documentada cuando se dividan contratos en varias partes, asegurando que no se realice con el objetivo de eludir las normas de contratación. Además, es necesario realizar auditorías internas regulares para revisar los patrones de contratación y detectar cualquier irregularidad en la división de contratos.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): En caso de descubrir un fraccionamiento irregular de contratos, se debe llevar a cabo una revisión completa de todos los contratos involucrados para determinar el alcance de la irregularidad. Las medidas disciplinarias contra los responsables son esenciales para mantener la integridad del proceso de contratación. También es importante comunicar los hallazgos y las acciones correctivas a las autoridades pertinentes y reforzar los controles y procedimientos para evitar que estos incidentes se repitan. La revisión y actualización de las políticas de contratación pueden ser necesarias para cerrar cualquier laguna que haya facilitado el fraccionamiento indebido.

10.4. Fraccionar de manera irregular contratos, de manera que se tramitan como contratos menores cuando tienen idéntico objeto y deberían haberse tramitado mediante procedimiento abierto mediante la división en lotes cumpliendo con los principios de publicidad y concurrencia.

Definición: Este riesgo se refiere a la práctica de dividir artificialmente un contrato de gran escala en varios contratos menores con el mismo objeto, con el fin de eludir los procedimientos de contratación pública que requieren la división en lotes y la publicidad adecuada. Esto no solo evita una competencia justa y abierta, sino que también puede resultar en una gestión ineficiente y falta de transparencia.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Para evitar este tipo de fraccionamiento irregular, es esencial establecer políticas claras que prohíban esta práctica y capacitar al personal en la normativa aplicable, asegurando su conocimiento sobre la importancia de la publicidad y concurrencia en los procedimientos de contratación. La implementación de controles internos rigurosos y auditorías regulares es clave para detectar cualquier intento de elusión de las normas mediante la división indebida de contratos. Es necesario que todos los contratos potenciales sean evaluados cuidadosamente para determinar si la división en lotes es apropiada, basándose en criterios técnicos y económicos bien definidos. Además, se debe exigir una justificación detallada y transparente para cualquier decisión de no dividir un contrato en lotes, sometiendo dicha decisión a una revisión por un comité independiente o por la autoridad de supervisión pertinente.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): Si se detecta que se ha producido un fraccionamiento irregular de contratos, es crucial llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar cómo ocurrió el incumplimiento y quiénes son los responsables. Se deben aplicar sanciones adecuadas, que pueden incluir medidas disciplinarias o acciones legales, para aquellos que hayan infringido las normas. Es fundamental corregir cualquier irregularidad contractual identificada, incluso mediante la anulación de contratos si fuera necesario. También es importante comunicar los hallazgos y las acciones tomadas tanto internamente como a las autoridades y partes interesadas relevantes, para asegurar la transparencia y reforzar la confianza en el sistema de contratación pública. Finalmente, se deben revisar y mejorar los procedimientos y controles internos para evitar que esta situación se repita, lo que puede incluir la actualización de políticas, procedimientos y sistemas de monitoreo.

INSTRUMENTO DE GESTIÓN: PERSONAL LABORAL Y CONVOCATORIAS DE RECURSOS HUMANOS

CONJUNTO DE RIESGOS 11. LIMITACIÓN DE LA CONCURRENCIA

11.1 La convocatoria no tiene la suficiente difusión

Definición:

La publicación de la convocatoria no se ha realizado para garantizar la máxima difusión de las mismas, sin contribuir de esta manera a los principios de publicidad y transparencia. Esta bandera puede producirse por la falta de difusión de las mismas en los medios obligatorios establecidos en las bases comunes aplicables al procedimiento.

Verificar que la publicación de la convocatoria se realiza en todos los medios en que proceda para garantizar la máxima difusión.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

Evaluación del grado de insuficiencia y si el mismo ha podido limitar efectivamente la concurrencia. Si hubiera sido este el supuesto, la materialización de esta bandera podría implicar la no financiación de la actuación.

Así mismo, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad determinará si hay indicios de fraude para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o se ha materializado un conflicto de interés, en cuyo caso se instruirá un procedimiento de información reservada como paso previo a la incoación de un expediente disciplinario.

11.2 No se define con claridad en la convocatoria los requisitos que deben cumplir los solicitantes, o estos se orientan para favorecer a uno concreto:

Definición:

Los requisitos que deben cumplir los solicitantes no quedan claros o son ambiguos para una correcta y exacta interpretación, lo cual puede derivar en que potenciales solicitantes opten por no presentarse a la convocatoria, o bien derive en la selección deliberada de un determinado solicitante.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Asegurar que los requisitos exigidos para ser solicitante quedan recogidos de forma clara e inequívoca en la convocatoria, con un nivel de detalle adecuado, que permita delimitar claramente a aquellos solicitantes que no cumplen los mismos, y evite que la adjudicación se oriente a uno concreto.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

Siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad determinará si hay indicios de fraude para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o se ha materializado un conflicto de interés, en cuyo caso se instruirá un procedimiento de información reservada como paso previo a la incoación de un expediente disciplinario.

Podría suponer la retirada de la actuación.

11.3. No se han respetado los plazos establecidos en la convocatoria para la presentación de solicitudes:

Definición:

Rechazo o inadmisión de una solicitud de presentación por supuesta entrega de la misma fuera de plazo cuando de forma efectiva ha sido presentada en plazo, o bien aceptación de una o varias solicitudes presentadas fuera de plazo. En tales casos, los plazos establecidos en la convocatoria no se han cumplido en lo relativo a la presentación de las solicitudes.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Establecer sistemas de control de cumplimiento de plazos. Se recomienda el uso de una lista de verificación (checklist) que incluya el control del cumplimiento de los plazos establecidos para garantizar la regularidad de la tramitación.

- Establecer procedimientos que permitan garantizar el sellado de las solicitudes en el momento de registro, sellado que debe incorporar la fecha de entrada de las mismas.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

La entidad, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, determinará si hay indicios de fraude para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o se ha materializado un conflicto de interés, en cuyo caso se instruirá un procedimiento de información reservada como paso previo a la incoación de un expediente disciplinario.

Podría suponer la retirada de la actuación.

11.4. No hay conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de los puestos de trabajo convocados, ni una puntuación proporcionada de los méritos exigidos

Definición:

No observan las normas, principios y procedimiento establecidos para la contratación del personal en INCLIVA

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- ☑ Establecer sistemas de control para garantizar la aplicación de las normas relativas a las pruebas exigidas en el procedimiento.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

La entidad, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, determinará si hay indicios de fraude para tramitar la denuncia ante los órganos competentes o se ha materializado un conflicto de interés, en cuyo caso se instruirá un procedimiento de información reservada como paso previo a la incoación de un expediente disciplinario.

Podría suponer la retirada de la actuación.

CONJUNTO DE RIESGOS 12. CONFLICTOS DE INTERES EN EL ORGANO DE SELECCIÓN

Existe conflicto de intereses cuando en la adopción de decisiones confluyen el interés general o el interés público e intereses privados propios o compartidos con terceras personas o de familiares directos de alguno de los miembros del órgano de selección

12.1. Influencia deliberada en la evaluación y selección de los candidatos:

Definición:

Los miembros del órgano de selección influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del órgano de selección.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Aplicar la política el Código de Conducta y la política en materia de conflicto de interés de INCLIVA. Sería recomendable que la política de ética incluyera una declaración anual de ética e independencia y su registro para todos los trabajadores y especialmente para los miembros de órganos de selección.
- Firma por parte de los miembros que participan en el comité de selección de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI).
- Establecer medidas de información dirigidas a los miembros de los órganos de selección sobre los efectos de participar en actividades que pudieran comprometer su integridad. Sería recomendable que dichas medidas de información describan claramente las consecuencias que se derivarían de determinadas conductas irregulares.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, la entidad deberá reemplazar de inmediato y con carácter preventivo a los miembros del comité de selección que están influyendo deliberadamente en la selección. Se comenzará, de nuevo, el procedimiento de selección de proyectos.

En paralelo, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, la entidad deberá poner en conocimiento de los hechos a la unidad competente para abrir un procedimiento de información reservada y, en su caso, incoar expediente disciplinario.

12.2 Vinculación familiar o personal entre un miembro del comité de selección y un solicitante.

Definición:

Esta vinculación podría favorecer la contratación del solicitante.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

- Aplicar la política el Código de Conducta y la política en materia de conflicto de interés de INCLIVA. Sería recomendable que la política de ética incluyera una declaración anual de ética e independencia y su registro para todos los trabajadores y especialmente para los miembros de comités de selección.
- Establecer medidas de información dirigidas a los miembros del Comité de selección sobre los

efectos de participar en actividades que pudieran comprometer su integridad. Sería recomendable que dichas medidas de información describan claramente las consecuencias que se derivarían de determinadas conductas irregulares.

- ☒ Firma por parte de los miembros que participan en el comité de evaluación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI).

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, la entidad deberá reemplazar de inmediato y con carácter preventivo a los miembros del comité de selección que presenten un conflicto de interés aparente. Se comenzará, de nuevo, el procedimiento de selección.

CONJUNTO DE RIESGOS 13. ASIGNACIÓN INCORRECTA, Y PRESUMIBLEMENTE DELIBERADA, DE LOS COSTES DE PERSONAL ASOCIADOS AL PROYECTO

13.1. Se imputan costes de personal asignado al MRR pero utilizado para otras actividades:

Definición:

Imputación deliberada por parte del gestor del proyecto o IP de gastos de personal que corresponden a otro proyecto no financiado por el MRR a un proyecto financiado con cargo al MRR.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Disponer de un registro del tiempo de dedicación de su personal a los distintos proyectos. El procedimiento incorporará la emisión de certificados de dedicación por parte de los responsables del gestor del IP o RRHH de la entidad en su caso.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera supone un potencial riesgo de fraude. A este respecto, se deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes. Se ajustarán en todo caso los gastos afectados por esta irregularidad.

CONJUNTO DE RIESGOS 14. PERDIDA DE TRAZABILIDAD PARA AUDITORÍA

No se garantiza que toda la documentación relativa a los gastos de la actuación se conserva para disponer de una pista de auditoría adecuada.

14.1. La Unidad no ha realizado una correcta documentación de la actuación que permita garantizar la pista de auditoría

En el expediente de contratación de personal no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son: documentación de las convocatorias, composición del comité de selección, contratos, firma de toma de conocimiento de la financiación, etc.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante):

Establecer procedimientos de verificación de la documentación requerida para garantizar la pista de auditoría. Se recomienda la utilización de una lista de comprobación (checklist)

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post):

La materialización de esta bandera indica un potencial riesgo de fraude.

A este respecto, la entidad, siguiendo el procedimiento establecido en el canal de denuncias de INCLIVA, se entidad deberá determinar si la sospecha de fraude es suficiente para tramitar la denuncia ante los órganos competentes. En caso de lo fuera, se retirará el expediente.

Si se tratara de una irregularidad subsanable, se procederá a su subsanación.

Revisión de los controles para determinar si la materialización obedece a error puntual o a una incidencia sistémica.

CONJUNTO DE RIESGOS 15. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL

15.1 Realización de contrataciones sin ajustarse a los principios rectores de acceso al empleo público tal y como establece la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

Definición: Este riesgo se refiere a la contratación de personal sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, establecidos en la Ley 1/2015 de la Generalitat. Este incumplimiento puede dar lugar a procesos de selección poco transparentes o injustos, afectando la calidad del servicio público y la percepción de legitimidad en las contrataciones.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Para prevenir este riesgo, es esencial implementar un marco normativo y procedimientos claros que garanticen la aplicación estricta de los principios legales en todos los procesos de contratación. Esto incluye la elaboración de convocatorias públicas detalladas y accesibles, la formación continua del personal encargado de las selecciones y la revisión periódica de los procedimientos para asegurar su alineación con la normativa vigente. Al mismo tiempo, se formará al personal encargado en materia de requerimientos legales para la contratación pública.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): Si se materializa este riesgo, deben revisarse y corregirse las contrataciones realizadas de manera inapropiada, incluyendo la anulación de las mismas si es necesario. Además, se deben tomar medidas disciplinarias contra los responsables y establecer protocolos de revisión para evitar que se repita la situación. La entidad fortalecerá la capacitación del personal en temas legales y de derechos laborales.

15.2 Realización de contrataciones a cargo de proyectos de investigación sin autorización previa de la administración competente

Definición: Este riesgo implica realizar contrataciones a cargo de proyectos de investigación sin la debida autorización de la DGP, lo cual contraviene la normativa y puede llevar a irregularidades en el proceso de contratación, incluyendo la falta de control y supervisión adecuados.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Para prevenir este riesgo, es necesario establecer un procedimiento estricto que exija la obtención de la autorización previa de la DGP para cualquier contratación a cargo de proyectos de investigación. Este procedimiento debe incluir verificaciones cruzadas y la documentación exhaustiva de todos los pasos del proceso. También es importante realizar capacitaciones para el personal encargado de contrataciones, asegurando el conocimiento y cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): Si se detecta que se han realizado contrataciones sin la autorización requerida, es crucial regularizar la situación lo más pronto posible, informando a las autoridades competentes y evaluando la legalidad de los contratos en cuestión. Asimismo, deben implementarse controles internos adicionales para prevenir la recurrencia de este tipo de incumplimiento.

15.3 Falta de publicación de la oferta en el boletín o diario oficial donde se recojan las retribuciones, características y funciones del personal, así como en la página web de la entidad.

Definición: La omisión de la publicación de ofertas de empleo en los medios oficiales y en la página web de la institución puede llevar a una falta de transparencia y accesibilidad en el proceso de contratación. Esto vulnera el principio de publicidad y puede dar lugar a sospechas de favoritismo o arbitrariedad.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Es fundamental implementar procedimientos estándar que aseguren la publicación de todas las ofertas de empleo en los canales oficiales y en la página web de la entidad, incluyendo detalles sobre retribuciones, funciones y requisitos del puesto. Se debe designar a un responsable de la comunicación y publicidad de las ofertas de empleo para garantizar el cumplimiento de estas normas.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): Si se descubre que no se ha publicado una oferta de empleo como es debido, la entidad debe proceder a la publicación inmediata de la oferta y, si es necesario, repetir el proceso de selección para garantizar la transparencia y equidad. Es importante revisar y actualizar los protocolos de publicación para asegurar que no ocurran omisiones en el futuro.

CONJUNTO DE RIESGOS 16. INCOMPATIBILIDADES

16.1 Ejercicio simultáneo de otros puestos de trabajo o realización de tareas profesionales para otros organismos, empresas o particulares

Definición: Cuando un empleado del sector público instrumental ocupa otro puesto de trabajo o realiza tareas profesionales para otros organismos, empresas o particulares, sin la debida autorización puede dar lugar a conflictos de intereses o afectaciones en el desempeño de sus funciones. Este tipo de actividad puede comprometer la imparcialidad y la dedicación del empleado a su rol público.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Para prevenir este riesgo, se establecen y comunican claramente las políticas de incompatibilidad laboral y conflicto de intereses. Se debe requerir que todos los empleados declaren cualquier otro empleo o actividad profesional externa antes de asumirlos, y obtener la aprobación previa de la autoridad competente. Además, la vigilancia regular y auditoría de las actividades externas declaradas pueden ayudar a identificar y mitigar posibles conflictos.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): Si se descubre que un empleado de la institución ha estado involucrado en actividades externas sin la debida autorización, se deben investigar los hechos y, si es necesario, aplicar medidas disciplinarias que pueden incluir sanciones administrativas o incluso la terminación del contrato. Es crucial también revisar los procedimientos de control para asegurar una detección más temprana de este tipo de conflictos.

16.2 Aceptación de invitaciones o regalos y/o tratos habituales con el sector empresarial privado

Definición: La aceptación de regalos, invitaciones o tratos especiales de empresas privadas por parte de empleados del sector público instrumental puede influir indebidamente en las decisiones del empleado, comprometiendo la objetividad y la imparcialidad necesarias en la función pública y aumentando el riesgo en las tareas que desarrolle.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Para evitar este riesgo, las organizaciones deben establecer políticas estrictas que prohíban la aceptación de regalos o beneficios personales de cualquier entidad con la que tengan relaciones oficiales. Es fundamental ofrecer formación continua sobre ética y normativas anticorrupción, así como implementar un sistema de declaración de regalos e invitaciones recibidas, que sea transparente y revisable.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): Si se descubre que un empleado ha aceptado regalos o tratos especiales, se deben realizar investigaciones para determinar el alcance de la influencia indebida y tomar medidas disciplinarias adecuadas, que pueden incluir la restitución de los regalos, sanciones administrativas o legales, y el reforzamiento de las políticas de ética.

16.3 Acuerdos de patrocinio o imagen en empresas privadas

Definición: Involucra la posibilidad de que los empleados o personal adscrito a la institución acuerden o gestionen patrocinio con entidades privadas de manera que puedan crear conflictos de intereses o dependencia indebida hacia estas entidades. Los acuerdos de patrocinio pueden influir en las decisiones y políticas públicas, afectando la imparcialidad y transparencia del sector

público.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Se deben establecer criterios claros para la selección de patrocinadores y asegurar la transparencia y el escrutinio público de todos los acuerdos. La capacitación del personal en la gestión jurídica y ética de patrocinios y la inclusión de cláusulas de integridad en los contratos de patrocinio también son medidas importantes.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): Si se detecta un acuerdo de patrocinio inapropiado, se deben revisar y, si es necesario, rescindir dichos acuerdos. Es fundamental evaluar si ha habido algún impacto en la toma de decisiones o políticas, y tomar medidas correctivas. Además, la entidad debe revisar y fortalecer sus políticas de patrocinio y conflicto de intereses para prevenir futuros incidentes.

16.4 Gestión de información confidencial relevante sobre personas y organizaciones

Definición: Este riesgo se refiere al manejo inadecuado o la divulgación no autorizada de información confidencial por parte de los empleados. La información confidencial puede incluir datos personales, secretos, o cualquier otro tipo de información sensible que, si se gestiona inapropiadamente, puede tener consecuencias legales y reputacionales graves para la institución y los individuos afectados.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Establecer políticas estrictas de manejo de información confidencial, asegurando que todos los empleados comprendan y cumplan con las leyes y regulaciones de protección de datos. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad técnicas y administrativas, la capacitación regular sobre protección de datos y confidencialidad, y el monitoreo continuo del acceso y uso de información confidencial, tanto a nivel de institución como en los proyectos y/o ensayos médicos en los que la institución forme parte.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): En caso de una violación de la confidencialidad, la entidad debe investigar inmediatamente el incidente para mitigar el daño y cumplir con las obligaciones legales de notificación a las autoridades y a las personas afectadas. Se tomarán medidas disciplinarias contra los responsables de la violación y revisar las políticas y procedimientos de manejo de información para fortalecer la protección de datos en el futuro.

CONJUNTO DE RIESGOS 17. SALARIO Y RETRIBUCIONES

17.1 Ausencia de inclusión de todos los conceptos retributivos aplicables a los empleados en la masa salarial

Definición: Este riesgo implica que no todos los conceptos retributivos aplicables a los empleados están debidamente contemplados en la masa salarial autorizada. Esto puede incluir salarios básicos, complementos, incentivos, y otros beneficios. La omisión de estos conceptos puede llevar a una remuneración incorrecta, desigualdad en el pago y posibles reclamaciones por parte de los empleados.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Para prevenir este riesgo, es esencial realizar un análisis exhaustivo y regular de todos los conceptos retributivos aplicables, asegurándose de que estén claramente definidos y debidamente incluidos en la masa salarial. Esto implica la colaboración estrecha entre los departamentos de recursos humanos y finanzas, así como la revisión y actualización de las políticas salariales conforme a los convenios colectivos y las normativas laborales vigentes. Además, la transparencia y la comunicación efectiva con los empleados sobre los componentes de su compensación son cruciales.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): En caso de detectar la ausencia de ciertos conceptos retributivos en la masa salarial, se debe realizar una corrección inmediata de las remuneraciones afectadas y compensar a los empleados por cualquier pago atrasado o incorrecto. Asimismo, es importante revisar y actualizar las políticas de retribución y los sistemas de gestión de la masa salarial para prevenir futuros errores.

17.2 No adhesión a las tablas salariales del Convenio Colectivo aplicable

Definición: Los convenios colectivos son acuerdos negociados que establecen las condiciones laborales, incluyendo salarios, horarios y beneficios. El incumplimiento de establecer un salario acorde a las tablas salariales del convenio puede llevar a la incertidumbre legal y a la falta de estandarización en las condiciones laborales.

Controles a establecer de forma preventiva (ex ante): Para prevenir este riesgo, es fundamental que la institución se adhiera a los convenios colectivos sectoriales o, en su defecto, negocie y formalice un convenio colectivo propio en colaboración con los representantes de los empleados. Este proceso debe incluir la documentación adecuada y la aprobación formal por las autoridades competentes. Se promoverá por la institución, de ser necesario, un proceso de revisión regular de los convenios colectivos para asegurar su relevancia y adaptación a las normativas vigentes.

Acciones a realizar en caso de materialización (ex post): Si se descubre que no se están cumpliendo con el abono de los salarios propios del convenio colectivo en vigor o que el convenio no está formalizado, se encuentra derogado o no se está respetando, se debe iniciar inmediatamente el proceso de negociación, asegurando la participación de los representantes de los trabajadores y el cumplimiento de los requisitos legales. Además, se deben revisar las condiciones laborales actuales para alinearlas con las normativas y estándares adecuados, garantizando los derechos de los empleados y la legalidad de las prácticas laborales.

ANEXO V. DIRECTRICES SOBRE REGALOS A INCLUIR EN EL PLAN ÉTICO Y DE CONDUCTA DE INCLIVA (APARTADO 15.4)

❖ Introducción

Dicho Código establece el comportamiento esperado ante posibles circunstancias que pudieran dar lugar a fraude: conflicto de interés (obligación de comunicar información), política de regalos / comisiones / beneficios, lealtad y confidencialidad, transparencia e integridad de la información, utilización de datos y recursos públicos, compromiso con las personas con discapacidad, incompatibilidades de directivos, mandos intermedios y otros responsables de gestión.

❖ Prohibiciones

En cumplimiento de la política antifraude fruto de las obligaciones enmarcadas por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tenemos que estas directrices son de aplicación a todos aquellos que participan en el desarrollo de las actividades de INCLIVA, y en concreto:

- Empleados, con independencia de la modalidad contractual que determine su relación con INCLIVA, posición que ocupen o ámbito geográfico en el que desempeñen su trabajo.
- Miembros de los Órganos de Dirección de la Fundación (Gerencia, Secretaría General o Dirección Científica) o sus representantes personas físicas.
- Clientes, proveedores y cualesquiera otros terceros que, aunque no se mencionen de forma específica en la presente Política, tuvieran relación con INCLIVA, en la medida y situaciones en que este documento pueda resultarles de aplicación, y siempre y cuando INCLIVA tenga capacidad real de hacerlo efectivo frente a ellos.

Ni los órganos de gobierno y de gestión de la Fundación, ni los miembros o las personas vinculadas a ellos podrán dar ni aceptar regalos u obsequios, en el ejercicio de su cargo o responsabilidad, de tal relevancia que sean susceptibles de constituir un conflicto de interés por afectar a la libertad e independencia con la que deben ejercer su cargo o responsabilidad. Esta prohibición no será de aplicación cuando los obsequios o regalos bien sean de escaso valor económico, bien respondan a signos de cortesía habituales, o bien no estén prohibidos por la ley o las prácticas generalmente aceptadas en entidades de análoga naturaleza.

En este sentido, y a título no exhaustivo, quedan prohibidos:

- Los regalos consistentes en dinero en metálico, así como cualquier tarjeta regalo, bono, cheque o instrumento equivalente que permita la adquisición o acceso a bienes o servicios.
- La recepción de la prestación de todo tipo de servicios a título lucrativo.
- Las invitaciones de contenido o naturaleza socialmente no aceptables, desproporcionadas o de difícil justificación.
- Las invitaciones a viajes o estancias hoteleras sin causa justificativa de negocio.

- La entrega o facilitación de bienes, ya sea en titularidad, uso o bajo cualquier otro título, que suponga un aprovechamiento económico, disfrute o ventaja de algún tipo de bienes inmuebles o muebles, como, por ejemplo, coches, motos, embarcaciones, etc.

En síntesis, no se aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

❖ **Procedimiento de información**

Todo regalo que se reciba o sea ofrecido, que no figure exceptuado de acuerdo con lo dispuesto en la presente política, deberá ser registrado en un “Registro de Regalos” (en adelante “el Registro”) creado a tal efecto. Quien reciba el regalo deberá informar al Comité Antifraude en el plazo máximo de dos días hábiles, a través del correo electrónico que se habilite al efecto, quien indicará la siguiente información mínima:

- Descripción del regalo.
- Destinatario: identificación (nombre y cargo) de la persona a la que se envía el regalo.
- Remitente: identificación (nombre de la persona física o jurídica) de quien envía el regalo.
- Motivo del envío del regalo.
- Destino del regalo: devuelto o donado.
- Fecha de recepción u ofrecimiento.
- Firma del receptor/emisor del regalo y del Comité Antifraude. Acto seguido, el receptor deberá dar las indicaciones pertinentes a efectos de comunicar de forma expresa e inmediata al tercero que no es posible aceptar el regalo de acuerdo con la presente Política, devolviendo el regalo recibido en el plazo máximo de tres días hábiles, dejando constancia de la devolución ante el Comité Antifraude. En caso de no poderse devolver el regalo por circunstancias meramente objetivas, el Comité Antifraude dará las indicaciones oportunas al respecto.

ANEXO VI. MATRIZ DE RIESGOS DE FRAUDE

La Matriz de Riesgos de Fraude es una herramienta informativa diseñada para evaluar la exposición al riesgo en los instrumentos de gestión utilizados por INCLIVA para manejar los fondos. Esto se basa en la experiencia previa de la entidad, su historial y los procedimientos implementados a través de los sistemas de gestión y control. A través de esta matriz, se puede determinar la probabilidad de que ocurran riesgos y señalar los controles establecidos para mitigarlos refiriéndonos, especialmente, a:

- Contratos públicos
- Contratos menores
- Personal laboral y convocatorias de recursos humanos

Por lo tanto, la matriz identifica una serie de riesgos y banderas rojas asociados a cada uno de los instrumentos de gestión que INCLIVA puede utilizar durante la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos. En el futuro, este enfoque, basado en la propuesta de matriz de riesgos del SNCA, podrá extenderse a todos los instrumentos de gestión de fondos, tanto europeos como no europeos. Asimismo, se valorará la necesidad de ampliar el Catálogo que incluya los riesgos y banderas rojas más comunes en la actuación del SNCA.

La matriz es una herramienta dinámica de gestión, que se actualizará y adaptará según las necesidades de INCLIVA en su combate contra el fraude, siendo una competencia atribuida desde el inicio al Comité Antifraude.

El Comité Antifraude de INCLIVA será responsable de reunirse periódicamente, al menos una vez al año, con los responsables y gestores de riesgos que trabajan directamente en los proyectos y subproyectos del PRTR. Este Comité solicitará anualmente a los gestores de riesgos designados que completen el cuestionario de autoevaluación de la matriz de riesgos. A partir de las respuestas obtenidas, se evaluarán los resultados de impacto y la probabilidad de los riesgos y banderas rojas identificadas. El Comité elaborará un informe anual de evaluación donde se presentarán los resultados de la matriz, así como las medidas preventivas y correctoras propuestas. Los resultados de este informe se tendrán en cuenta para la evaluación periódica del Plan Antifraude de INCLIVA.

En la matriz encontramos los siguientes conceptos clave:

A) Impacto del riesgo: impacto o coste (tanto económico como de reputación, operativo o en otros términos) que tendría para la organización el hecho de que el riesgo llegara a materializarse. Debe valorarse de 1 a 4 de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Impacto limitado: el coste para la organización de que el riesgo se materializara sería limitado o bajo, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo, supondría un trabajo adicional que retrasa otros procesos).
2. Impacto medio: el coste para la organización de que el riesgo se materializara sería medio debido a que el carácter del riesgo no es especialmente significativo, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo, retrasaría la consecución del hito u objetivo no crítico).

3. Impacto significativo: el coste para la organización de que el riesgo se materializara sería significativo debido a que el carácter del riesgo es especialmente relevante o porque hay varios beneficiarios involucrados, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo, pondría en peligro la consecución del hito u objetivo no crítico o retrasaría la consecución del hito u objetivo crítico o hito u objetivo CID).
4. Impacto grave: el coste para la organización de que el riesgo se materializara sería grave, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional (por ejemplo, percepción negativa en los medios de comunicación o derivar en una investigación oficial de las partes interesadas) u operativo (por ejemplo, pondría en peligro la consecución del hito u objetivo crítico o hito u objetivo CID).

B) Probabilidad del riesgo: probabilidad de que el riesgo se materialice. Debe de valorarse de 1 a 4 de acuerdo con los siguientes criterios:

- (1) Va a ocurrir en muy pocos casos
- (2) Puede ocurrir alguna vez
- (3) Es probable que ocurra
- (4) Va a ocurrir con frecuencia

C) Riesgo bruto: nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores de riesgo asociados a ellos, calculado a partir del impacto y de la probabilidad definidos de forma inicial sin tener en cuenta el efecto de los controles existentes o previstos en el futuro.

D) Indicador de Riesgo: hecho que revela información cualitativa o cuantitativa formada por uno o varios datos basados en hechos, opiniones o medidas, constituyéndose en indicadores o señales de alarma de la posibilidad de que exista el riesgo.

E) Controles: controles diseñados e implantados para mitigar el riesgo de los indicadores de cada uno de los riesgos.

F) Riesgo neto: nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores de riesgo asociados a ellos, calculado a partir del impacto y de la probabilidad de cada riesgo una vez valorada la existencia y la eficacia de los controles implementados en la entidad para cada uno de los indicadores.

G) Plan de acción: controles a implementar por la entidad para reducir el riesgo neto a unos niveles de riesgo objetivo aceptables.

H) Riesgo objetivo o residual: nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores asociados a ellos, calculado teniendo en cuenta el efecto de los controles previstos por la entidad para reducir el riesgo neto.

APROBADO POR LA JUNTA DE PATRONOS DE 12 DE DICIEMBRE DE 2024